

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE DERECHO



Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Título de Abogado

Informe del fallo de la Corte Internacional de Justicia del 31 de marzo de 2004 –
Caso Avena y Otros Nacionales Mexicanos (México vs. Estados Unidos de América)

Autor:

LUIS ALBERTO CERUTI CCAHUANA

Código del alumno:

19947207

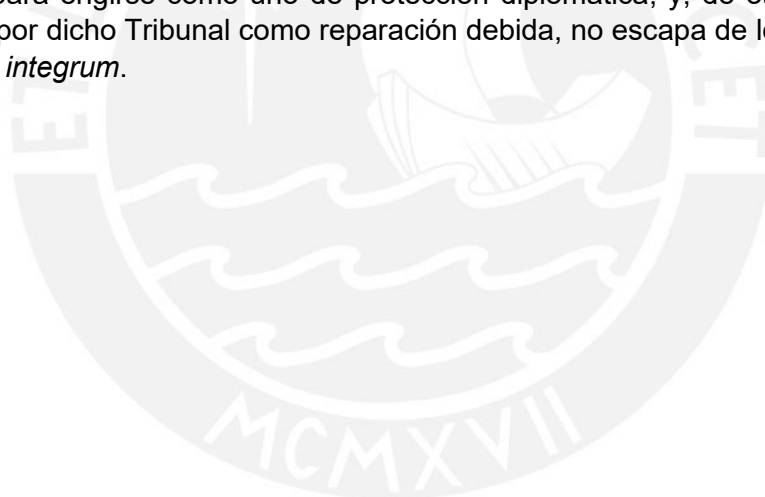
Revisora:

RENATA ANAHI BREGAGLIO LAZARTE

Lima, 2021

RESUMEN

En el presente informe se analiza el fallo de la Corte Internacional de Justicia del 31 de marzo de 2004 en el denominado caso Avena y Otros Nacionales Mexicanos, tercera ocasión en la que Estados Unidos de América es demandado ante dicho Tribunal, esta vez por los Estados Unidos Mexicanos, por el incumplimiento de sus obligaciones bajo el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. El caso, para cuya resolución la Corte se pronuncia sobre la naturaleza, interpretación y aplicación de normas contenidas en dicha Convención, tiene en común con sus antecesores – Breard (1998) y LaGrand (2001)- que involucra a nacionales extranjeros que habían sido condenados a muerte sin que el Estado demandado hubiera cumplido con su obligación de notificarles su derecho al acceso consular. Motivado por su experiencia en el ejercicio de funciones consulares, en su análisis, el autor identifica cuatro problemas jurídicos sobre la base de la relevancia de las instituciones jurídicas involucradas y su importancia en la resolución del caso, siendo éstos: 1) lo referido a la competencia de la Corte, 2) cómo entender la obligación de informar “sin demora”, 3) la naturaleza de la reclamación y 4) la determinación de la “reparación adecuada”. De las conclusiones a las que se arriba, destacan, de un lado, que pese a lo señalado por la Corte, el caso reúne las condiciones para erigirse como uno de protección diplomática, y, de otro, que lo que determinado por dicho Tribunal como reparación debida, no escapa de los alcances de la *restitutio in integrum*.



INDICE TEMATICO

I. INTRODUCCION Y JUSTIFICACION	4
II. RELACION DE LOS HECHOS SOBRE LOS QUE VERSA LA CONTROVERSIA.....	5
III. IDENTIFICACION DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURIDICOS.....	8
IV. DESARROLLO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURIDICOS	8
1. PROBLEMA JURIDICO N° 1: ¿Tiene competencia la Corte para decidir si EEUU incumplió sus obligaciones para con México con arreglo al artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares?.....	8
1.1. Sobre el consentimiento de las partes a someter esta disputa a la Corte.....	8
1.2. ¿Son admisibles las objeciones a la competencia y admisibilidad planteadas por EEUU presentadas fuera del plazo establecido por el artículo 79.1 del Reglamento de la Corte?	9
1.3. Sobre la obligación del agotamiento de recursos internos	10
1.4. Sobre si los derechos contenidos en el artículo 36 son “derechos humanos”	11
2. PROBLEMA JURIDICO N° 2: ¿Incumplió EEUU la obligación de informar a los nacionales mexicanos conforme lo establecido en el artículo 36 de la CVRC?	11
2.1. Sobre la obligación de informar “sin demora”:	12
3. PROBLEMA JURIDICO N° 3: ¿Puede México mediante el ejercicio de su derecho a la protección diplomática reclamar por la violación de los derechos de sus nacionales?	14
3.1. Sobre el ejercicio de la protección diplomática.....	14
3.1.1. Sobre los derechos establecidos por el artículo 36 de la CVRC	15
3.1.2. La Nacionalidad	16
3.1.3. Sobre el agotamiento de recursos internos.....	17
4. PROBLEMA JURIDICO N° 4: ¿En qué consiste la obligación de reparar en el presente caso?	19
4.1. ¿Debe la reparación compensar las violaciones al artículo 36 de la CVRC o las declaratorias de culpabilidad y condenas?.....	19
4.2. Sobre la naturaleza de los derechos de los individuos contenidos en el artículo 36 de la CVRC.....	20
4.3. Los derechos reconocidos al individuo en el art. 36 de la CVRC según la Corte IDH	21
4.4. Sobre la determinación de la reparación debida.....	21
V. CONCLUSIONES.....	23
VI. FUENTES BIBLIOGRAFICAS	25

I. INTRODUCCION Y JUSTIFICACION

El Caso Avena y Otros Nacionales Mexicanos (Estados Unidos Mexicanos vs. Estados Unidos de América) es el tercer caso ventilado ante la Corte Internacional de Justicia con relación a la naturaleza y alcance de normas vinculadas a la función y protección consular contenidas en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Además de ser Estados Unidos de América el Estado demandado en éste y los dos casos anteriores (Breard¹ y LaGrand²), el caso Avena (como generalmente es conocido) tiene en común con sus antecesores que involucra a nacionales de sus respectivos Estados demandantes que habían sido condenados a muerte sin que, según argumentaban, el Estado demandado hubiera cumplido con su obligación de notificarles su derecho al acceso consular al amparo del artículo 36 de dicha Convención.

Debe señalarse que el presente informe no pretende abordar la totalidad de cuestiones de índole jurídica que comprende el caso, sino que se centra en el análisis de lo que constituye, a juicio del autor, los principales problemas jurídicos de Derecho Internacional que nos planteamos sobre la base de la relevancia de las instituciones jurídicas involucradas y su importancia en la resolución del caso.

La presentación de los problemas es precedida por un resumen de los hechos del caso, incluyendo una sucinta referencia a las objeciones presentadas por los Estados Unidos de América tanto a la competencia de la Corte Internacional de Justicia como a la admisibilidad de la demanda.

Con ocasión de abordar el primer problema jurídico, referido a dilucidar si la Corte Internacional de Justicia era competente para decidir sobre la materia, se propone un breve análisis sobre la admisibilidad de las objeciones preliminares en conjunto, para seguidamente destacar dos de dichas objeciones (una a la competencia de la Corte *per se* y otra a la admisibilidad de la demanda), que resultan relevantes para el abordaje de una de las, a nuestro juicio, principales cuestiones en el presente caso, esto es, si éste era o no uno de protección diplomática (problema número 3).

El segundo problema a esclarecer es si el Estado demandado incumplió sus obligaciones con arreglo al artículo 36 de la Convención. El tercero que nos planteamos es si puede México mediante el ejercicio de su derecho a la protección diplomática reclamar por la violación de los derechos de sus nacionales. El último problema a desarrollar es el referido a la determinación de la reparación debida por el hecho internacionalmente ilícito.

Finalmente, debemos mencionar que el caso Avena y Otros Nacionales Mexicanos nos resulta especialmente de interés por su vinculación con las funciones consulares que el autor ha tenido el honor de ejercer en reiteradas oportunidades en el marco de sus labores como funcionario diplomático designado a prestar servicios en el exterior. Para dicho ejercicio, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y el Reglamento Consular, entre otros, constituyen los instrumentos normativos rectores de su actuación en defensa de los intereses del Perú y de nuestros connacionales en el extranjero.

¹ Vienna Convention on Consular Relations (Paraguay v. United States of America), Provisional Measures, Order of 9 April 1998, I. C. J. Reports 1998

² LaGrand (Germany v. United States of America), Judgment, I. C. J. Reports 2001

II. RELACION DE LOS HECHOS SOBRE LOS QUE VERSA LA CONTROVERSIDA

1. El 9 de enero de 2003, los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, México) interponen ante la Secretaría de la Corte Internacional de Justicia (en adelante, la Corte) una solicitud para instituir un proceso contra Estados Unidos de América (en adelante, EEUU) por supuestas violaciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (en adelante, CVRC) cometidas por EEUU.

2. Ese mismo día, México presenta también una solicitud de medidas provisionales basada en el artículo 41 del Estatuto de la Corte y los artículos 73, 74 y 75 del Reglamento de la Corte³.

3. El 5 de febrero de 2003, la Corte indica las siguientes medidas provisionales:

- a) EEUU tomará “todas las medidas necesarias” para asegurar que el Sr. César Roberto Fierro Reyna, el Sr. Roberto Moreno Ramos y el Sr. Osvaldo Torres Aguilera no sean ejecutados a la espera del fallo definitivo;
- b) EEUU informará a la Corte de todas las medidas que tome en cumplimiento a dicha medida.

4. En una carta de 2 de noviembre de 2003, EEUU confirma a la Corte que desde la fecha de la imposición de las medidas provisionales, ninguna de las personas cuya protección México invocaba, había sido ejecutada.

5. Se celebra audiencias públicas entre el 15 y el 19 de diciembre de 2003. En el procedimiento oral, México solicita, en resumen, que la Corte declare:

- a) Que EEUU violó sus obligaciones para con México, por derecho propio y en ejercicio de su derecho a la protección diplomática, al no haber informado, sin demora, a los 52 nacionales mexicanos condenados a pena capital en EEUU, de su derecho a la notificación y el acceso consular de acuerdo con el artículo 36⁴ 1.b) de la CVRC, privando a México de su derecho a la protección consular;

³ De acuerdo con la solicitud de medidas provisionales presentada por México “(u)nless the Court indicates provisional measures directing the United States to halt any executions of Mexican nationals until this Court's decision on the merits of Mexico's claims, the executive officials of constituent states of the United States will execute Messrs. Fierro [Reyna], Moreno Ramos, Torres [Aguilera], or other Mexican nationals on death row before the Court has had the opportunity to consider those claims. In that event, Mexico would forever be deprived of the opportunity to vindicate its rights and those of its nationals (...)” – Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America, Provisional Measures, Order of 5 February 2003, I. C. J. Reports 2003, paragraph 12)

⁴ El artículo 36 de la CVRC, bajo el epígrafe “Comunicación con los nacionales del Estado que envía”, prevé:

“1. Con el fin de facilitar el ejercicio de las funciones consulares relacionadas con los nacionales del Estado que envía:

a) los funcionarios consulares podrán comunicarse libremente con los nacionales del Estado que envía y visitarlos. Los nacionales del Estado que envía deberán tener la misma libertad de comunicarse con los funcionarios consulares de ese Estado y de visitarlos;

b) si el interesado lo solicita, las autoridades competentes del Estado receptor deberán informar sin retraso alguno a la oficina consular competente en ese Estado cuando, en su circunscripción, un nacional del Estado que envía sea arrestado de cualquier forma, detenido o puesto en prisión preventiva. Cualquier comunicación dirigida a la oficina consular por la persona arrestada, detenida o puesta en prisión preventiva, le será asimismo transmitida sin demora por dichas autoridades, las cuales

b) Que la obligación prevista en el artículo 36.1 de la CVRC exige que dicha notificación sea oportuna y antes de que las autoridades competentes del Estado receptor tomen cualquier medida potencialmente nociva para los derechos del nacional extranjero;

c) Que EEUU violó el artículo 36.2 de la CVRC por no proceder a un examen y una reconsideración significativos y efectivos de las declaraciones de culpabilidad y las condenas de los nacionales mexicanos, invocando doctrinas de derecho interno, como la preclusión procesal, para su incumplimiento;

d) Que México tiene derecho a la plena reparación en la forma de *restitutio in integrum*, es decir, restableciendo el *statu quo ante* anulando o privando de todo efecto las declaraciones de culpabilidad y las condenas; así como la obligación de tomar todas las medidas necesarias para asegurar que una anterior violación del artículo 36 no afecte los procedimientos posteriores;

e) De no ser anuladas, EEUU procederá, por medios de su propia elección, a un examen y una reconsideración significativos y efectivos, obligación que no puede ser satisfecha mediante procedimientos de gracia; y

f) Que EEUU deberá cesar sus violaciones del artículo 36 de la CVRC y dar garantías y seguridades adecuadas de que tomará medidas suficientes para un mejor cumplimiento del artículo 36.1 y para asegurar el cumplimiento del artículo 36.2.

6. Por su parte, EEUU sostiene que su conducta respecto a nacionales extranjeros detenidos, se ha ajustado a lo fallado por la Corte en la causa LaGrand (República Federal de Alemania vs. los Estados Unidos de América). Por tanto, solicita que la Corte juzgue y declare desestimadas las pretensiones de México.

7. EEUU planteó cuatro objeciones a la competencia de la Corte. En primer lugar sostiene que México pretende que la Corte aborde el tratamiento de nacionales mexicanos en los sistemas de justicia penal federal y de los estados federados de EEUU, y con ello el funcionamiento de su sistema de justicia penal en su conjunto; lo que constituiría un abuso de su competencia. Seguidamente, señala que el artículo 36 de la CVRC no crea ninguna obligación que limite los derechos de EEUU a detener a un nacional extranjero y procesarlo, procedimientos que no están reñidos con dicha norma. También refiere que restablecer el *statu quo ante* significaría una intrusión en la independencia de sus tribunales, lo que está fuera de la competencia de la Corte. Finalmente arguye que la Corte carece de competencia para determinar si la notificación consular es un derecho humano, o para declarar cuáles son los requisitos fundamentales del debido proceso.

habrán de informar sin dilación a la persona interesada acerca de los derechos que se le reconocen en este apartado;

c) los funcionarios consulares tendrán derecho a visitar al nacional del Estado que envía que se halle arrestado, detenido o en prisión preventiva, a conversar con él y a organizar su defensa ante los tribunales. Asimismo, tendrán derecho a visitar a todo nacional del Estado que envía que, en su circunscripción, se halle arrestado, detenido o preso en cumplimiento de una sentencia. Sin embargo, los funcionarios consulares se abstendrán de intervenir en favor del nacional detenido, cuando éste se oponga expresamente a ello.

2. Las prerrogativas a las que se refiere el párrafo 1 de este artículo se ejercerán con arreglo a las leyes y reglamentos del Estado receptor, debiendo entenderse, sin embargo, que dichas leyes y reglamentos no impedirán que tengan pleno efecto los derechos reconocidos por este artículo.”

8. EEUU también presenta cinco objeciones a la admisibilidad de la demanda. Sostiene, primero, que al solicitar la *restitutio in integrum* México pretende que la Corte actúe como un tribunal de apelaciones penales. Señala seguidamente que México no puede ejercer protección diplomática sobre sus nacionales, pues considera que en cada uno de los casos individuales existen aún recursos internos por agotar. Vinculado con lo anterior, EEUU indica a continuación que, habida cuenta de que algunos de los nacionales mexicanos detentan también la nacionalidad estadounidense, México no puede ejercer protección diplomática respecto de ellos. En su cuarta objeción plantea que, en la práctica, México había renunciado a reclamar por las supuestas violaciones a la CVRC, al no haberlas comunicado a los Estados Unidos o haberlo hecho solo después de una considerable demora. Finalmente, EEUU solicita a la Corte que no admita que México pueda reclamarle el cumplimiento de estándares de conducta que no aplica en su propia práctica.

9. En su fallo del 31 de marzo de 2004, luego de desestimar las objeciones tanto a su competencia como a la inadmisibilidad de las reclamaciones mexicanas, la Corte decide que:

a) EEUU incumplió sus obligaciones conforme al artículo 36.1 b) de la CVRC al no informar, sin demora, a 51 nacionales mexicanos⁵, tras su detención, de sus derechos contenidos en el mismo;

b) También incumplió su deber de notificar sin demora a la respectiva oficina consular mexicana de la detención de 49 nacionales mexicanos⁶, con lo que privó a México de su derecho a prestarles asistencia consular.

c) EEUU privó también a México de su derecho a comunicarse con dichos nacionales y visitarlos en su centro de detención.

d) En 34 de los casos⁷, EEUU impidió que México pudiera organizar, en tiempo oportuno, la defensa de sus nacionales, violando el artículo 36.1 c) de la CVRC.

e) Al no haber permitido el examen y la reconsideración de las declaraciones de culpabilidad y condenas de los señores César Roberto Fierro Reyna, Roberto Moreno Ramos y Osvaldo Torres Aguilera, EEUU violó sus obligaciones conforme al artículo 36.2 de la CVRC;

f) La reparación adecuada es que EEUU permita, por medios de su propia elección, el examen y la reconsideración de las declaraciones de culpabilidad y condenas de los 51 nacionales mexicanos;

g) Toma nota del compromiso de EEUU de asegurar la aplicación de medidas concretas para el cumplimiento de sus obligaciones conforme al 36.1 b) de la CVRC; y que dicho compromiso satisface la solicitud mexicana de garantías y seguridades de no repetición;

h) En caso se impongan penas graves sin haber observado el 36.1 b) de la CVRC, EEUU procederá, por medios de su propia elección, al examen y la

⁵ Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America), Judgment, I. C. J. Reports 2004, paragraph 106 (1)

⁶ Ibid, paragraph 106 (2)

⁷ Ibid, paragraph 106 (4)

reconsideración de la declaración de culpabilidad y la condena, permitiendo que se reconozca la violación de dicha norma.

III. IDENTIFICACION DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURIDICOS

Como se ha mencionado, el primer problema jurídico a ser desarrollado es dilucidar si la Corte Internacional de Justicia era competente para decidir sobre la materia. El segundo es esclarecer si el Estado demandado incumplió sus obligaciones con arreglo al artículo 36 de la Convención. El tercer problema que nos planteamos es si puede México mediante el ejercicio de su derecho a la protección diplomática reclamar por la violación de los derechos de sus nacionales. El último problema a desarrollar es el referido a la determinación de la reparación debida por el hecho internacionalmente ilícito.

IV. DESARROLLO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURIDICOS

1. PROBLEMA JURIDICO N° 1: ¿Tiene competencia la Corte para decidir si EEUU incumplió sus obligaciones para con México con arreglo al artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares?

1.1. Sobre el consentimiento de las partes a someter esta disputa a la Corte.

EEUU sostiene que la Corte carece de competencia para decidir “muchas de las reclamaciones de México”, que, a su parecer, no se desprenden de la interpretación o aplicación de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, y que, según refiere, nunca acordó ventilar ante la Corte.⁸

La CVRC fue adoptada el 24 de abril de 1963 y que entró en vigor el 19 de marzo de 1967. México y EEUU son partes de la CVRC desde el 16 de junio de 1965 y 24 de noviembre de 1969, respectivamente⁹. Asimismo, ambos Estados, a la fecha de los procedimientos ante la Corte, eran partes, sin reserva alguna, del Protocolo Facultativo de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares concerniente al Arreglo Pacífico de Controversias (en adelante, el Protocolo Facultativo). En el artículo 1 de dicho Protocolo Facultativo, que entró también en vigor el 19 de marzo de 1967¹⁰, se establece que:

“Las controversias originadas por la interpretación y aplicación de la Convención se someterán obligatoriamente a la Corte Internacional de Justicia, que a este título podrá entender en ellas a demanda de cualquiera de las partes en la controversia que sea parte en el presente Protocolo”.

⁸ Avena..., Op cit., paragraph 26.

⁹ Avena ..., Provisional Measures, Op Cit., paragraph 40

¹⁰ Ver:

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=III-8&chapter=3&clang=en

Consulta: 05/11/2020

Esta modalidad de competencia obligatoria se encuentra reconocida, a su vez, en lo establecido en el artículo 36 numeral 1 del Estatuto de la Corte, el mismo que señala que:

“La competencia de la Corte se extiende a todos los litigios que las partes le sometan y a todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados y convenciones vigentes”.

La Corte señala que su competencia ha sido invocada bajo la CVRC y su Protocolo Facultativo para determinar la naturaleza y alcance de las obligaciones asumidas por EEUU hacia México.

En tal sentido, concluimos que frente a una controversia que surge entre ambos Estados respecto a la interpretación y aplicación de las obligaciones que a las que están comprometidas conforme el artículo 36 de la CVRC, la Corte será competente para conocer dicha causa y decidir respecto de ella.

1.2. ¿Son admisibles las objeciones a la competencia y admisibilidad planteadas por EEUU presentadas fuera del plazo establecido por el artículo 79.1 del Reglamento de la Corte?

México solicita que se declare inadmisibles las objeciones presentadas por EEUU tanto respecto de la competencia de la Corte como de la admisibilidad de la demanda, al haber sido planteadas después del vencimiento del plazo establecido el párrafo 1 del artículo 79 del Reglamento de la Corte, enmendado en el año 2000¹¹.

Al respecto, el artículo 79.1 establece que:

“Cualquier excepción a la competencia de la Corte o a la admisibilidad de la solicitud, o cualquier otra excepción sobre la cual el demandado pide que la Corte se pronuncie antes de continuar el procedimiento sobre el fondo, deberá ser presentada por escrito lo antes posible, y a más tardar en el plazo de tres meses a partir de la presentación de la Memoria” (*subrayado nuestro*)

Sobre el particular, la Corte considera que, conforme reza el encabezado de la respectiva subsección, la regla contenida en el artículo 79.1 del Reglamento sólo aplica a excepciones preliminares, respecto de las cuales la parte que las formula solicita una decisión antes de continuar con los procedimientos. Para la Corte, objeciones fuera de plazo, como las planteadas por EEUU, aunque ya no pueden suspender los procedimientos, pueden ser consideradas junto con el fondo debido a su naturaleza o vinculación con éste. Por ello, la Corte decide rechazar la objeción mexicana.

Disentimos con dicho parecer. En la línea de lo resaltado por el magistrado Parra Aranguren en su opinión separada del fallo, las partes habían acordado previamente que se llevara a cabo una sola ronda de procedimientos, y que “nada fue dicho respecto a excepciones preliminares”¹². Si bien es cierto que EEUU no las formula

¹¹ La Memoria mexicana fue presentada el 23 de junio de 2003, mientras que las objeciones de EEUU fueron incluidas en su Contramemoria, ingresada el 3 de noviembre de ese año.

¹² *Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America)*, 2004, Separate opinion of judge Parra-Aranguren, paragraph 3 (traducción propia)

bajo el *nomen iuris* de “excepciones preliminares”, no queda duda en su Contramemoria que las plantea con el objeto de que la Corte decida sobre ellas antes de continuar con los procedimientos.¹³

Sobre el consentimiento al sometimiento a la Corte, e independientemente de lo señalado en el punto anterior respecto al reconocimiento de ambos Estados de la competencia obligatoria de la Corte frente a disputas derivadas de la interpretación o aplicación del CVRC, es pertinente destacar que no se evidencia en la conducta de EEUU, por lo menos hasta la presentación de su Contramemoria, cuestionamiento alguno a la competencia de la Corte.

Por el contrario, podemos destacar que ambas partes requirieron a la Corte que les extendiera el plazo para la presentación de sus respectivas Memorias. Asimismo, en su misiva del 2 de noviembre de 2003, más de cuatro meses después de la presentación de la Memoria de México, EEUU informa a la Corte sobre las gestiones llevadas a cabo en cumplimiento de su orden sobre medidas provisionales, dictada el 5 de febrero de ese año.

No obstante el mencionado encabezado de la subsección, el artículo 79.1 contempla toda objeción a la jurisdicción o admisibilidad y no se refiere de manera taxativa a las denominadas “excepciones preliminares”. No se entendería el objeto de la regla si es que excepciones preliminares a la jurisdicción o admisibilidad solo fueran admisibles siempre que se presenten dentro de un plazo, mientras que objeciones sobre las mismas categorías puedan ser admitidas sin mediar plazo, aunque desprovistas de eficacia (y utilidad) en caso sean declaradas procedentes, al supuestamente no poder suspender los procedimientos sobre el fondo.

1.3. Sobre la obligación del agotamiento de recursos internos

Una de las principales objeciones a la admisibilidad planteadas por EEUU es la relacionada con el agotamiento de recursos internos como requisito esencial para que México pueda ejercer la protección diplomática de sus nacionales. EEUU sostiene, al respecto, que habida cuenta de que en todas las reclamaciones individuales existen recursos internos disponibles, no es posible admitir la demanda mexicana.

La Corte rechaza esta excepción. Parte de reconocer que los derechos individuales consagrados en el artículo 36.1 b) de la CVRC deben ser hechos valer, ante todo, en el sistema jurisdiccional estadounidense. Sólo cuando la vía interna se agote, México podrá invocar ante la Corte la protección de los derechos de sus nacionales.

Sin embargo, la Corte recuerda que México no afirma estar actuando únicamente bajo ese fundamento. Alternativamente, alega actuar como consecuencia del daño que ha sufrido tanto directamente como a través de sus nacionales. A la luz de la interdependencia entre los derechos del México y los de sus nacionales, México puede solicitar “en su propio nombre” que la Corte decida sobre el incumplimiento de las obligaciones emanadas del artículo 36.1 b). La regla de agotamiento de los recursos no se aplica a dicha solicitud.

¹³ Avena..., Counter-Memorial of the United States of America, chapter IV, subparagraph 4.1.: “*Before proceeding, the Court should weigh whether characteristics of the case before it today, or special circumstances related to particular claims, render either the entire case, or particular claims, inappropriate for further consideration and decision by the Court (...)*” (subrayado nuestro)

Como se observa, la conclusión a la que arriba la Corte le permite ratificar su competencia para decidir sobre el caso, aunque a través de un enfoque que en nuestra opinión minusvalora el interés predominante de México al decidir llevar el asunto a la Corte, esto es la protección de los derechos de sus nacionales, particularmente de aquellos quienes enfrentan la pena capital¹⁴.

Si bien coincidimos que la regla de agotar los recursos internos no aplica en el presente caso, no acompañamos el razonamiento que lo justifica. Consideramos, por el contrario, que el hecho que no aplique la mencionada regla no implica necesariamente que éste no sea un caso de protección diplomática. Este asunto se abordará en detalle al analizar el problema jurídico N° 3.

1.4. Sobre si los derechos contenidos en el artículo 36 son “derechos humanos”

Otra de las objeciones estadounidenses que consideramos importante es la referida al cuestionamiento por parte de EEUU de la competencia de la Corte para pronunciarse si el derecho de notificación y comunicación consular es un “derecho humano fundamental”, que forma parte del debido proceso en procedimientos penales y ha de ser garantizado por los Estados partes del CVRC.

La Corte rechaza la objeción, señalando que lo afirmado por México corresponde a una cuestión de interpretación del artículo 36.1 de la CVRC, función para la que es competente la Corte.

Suscribimos la decisión de la Corte en este punto en tanto que cuestiones referidas a la interpretación de las normas contenidas en la CVRC se encuentran, como señalamos, comprendidas dentro la competencia obligatoria de la Corte en virtud del artículo 1 del Protocolo Facultativo. La cuestión sobre la naturaleza de los derechos de notificación y comunicación consular la abordaremos más adelante con ocasión del problema jurídico N° 3.

2. PROBLEMA JURIDICO N° 2: ¿Incumplió EEUU la obligación de informar a los nacionales mexicanos conforme lo establecido en el artículo 36 de la CVRC?

A efecto de determinar si hubo incumplimiento por parte de EEUU de sus obligaciones conforme al artículo 36 de la CVRC, la Corte determina que hay dos cuestiones principales a tratar: lo concerniente a la nacionalidad de las personas afectadas y lo que debe ser entendido como la obligación de informar “sin demora”:

La controversia respecto a la nacionalidad la trataremos más adelante como condición para el ejercicio de la protección diplomática con ocasión del problema jurídico N° 3. Interesa por lo pronto abordar lo que la Corte analiza con relación a la expresión “sin demora” (así como “retraso o dilación”, según los términos utilizados en la traducción al castellano de la CVRC)

¹⁴ Como refiere Juan Manuel Gómez Robledo, agente de México ante la Corte para este caso: “La defensa de quienes enfrentan una pena por definición irreversible, como es la pena capital, ha estado desde siempre en el centro de las preocupaciones de México, el cual ha buscado en el derecho internacional más y mejores mecanismos de promoción de los derechos de sus nacionales”. GOMEZ ROBLEDO, Juan Manuel (2005) El caso Avena y otros nacionales mexicanos ante la Corte Internacional de Justicia, En: Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. V, UNAM, p. 175.

2.1. Sobre la obligación de informar “sin demora”

México sostiene que en ningún caso EEUU proporcionó “sin demora” a los detenidos información sobre los derechos que le correspondían conforme al artículo 36.1 b).

Aún cuando solo en 1 de esos casos, México no pudo probar que EEUU violó dicha obligación¹⁵, subsiste por dilucidar para la Corte la cuestión sobre si la información acerca del acceso a la asistencia consular fue proporcionada a los detenidos “sin demora”. En 47 de los casos EEUU no objetó la afirmación de México de que los nacionales involucrados nunca fueron informados respecto de sus derechos. Es así que respecto de los cuatro restantes (los casos de los señores Ayala, Esquivel, Juárez y Solache) la Corte procederá a efectuar el análisis correspondiente.

Al respecto, México sostiene que el momento de la información es crítico para el ejercicio de los demás derechos contenidos en el artículo 36.1 b), por lo que considera que la expresión “sin demora” significa “de manera inmediata” tras la detención y, en todo caso, antes de proceder a cualquier interrogatorio.

La Corte advierte que el artículo 36.1 literal b) integra 3 elementos interrelacionados:

“1) derecho de la persona a ser informada “sin demora” sobre sus derechos conforme al artículo 36.1 b); 2) el derecho de la oficina consular a ser notificada “sin demora” sobre la detención de un nacional, si este lo solicita, 3) y la obligación del Estado receptor de transmitir sin demora cualquier comunicación que el detenido dirija a su consulado”¹⁶.

La Corte entiende que la frase debe ser interpretada según las reglas contenidas en el art. 31 y 32 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados¹⁷. Así, de una

¹⁵ Avena..., Op cit., paragraph 66: “Mexico has accordingly not shown that in the case of Mr. Salcido the United States violated its obligations under Article 36, paragraph 1 (b).”

¹⁶ Avena ..., Op Cit., paragraph 61. (traducción propia)

¹⁷ Artículo 31: **Regla general de interpretación**. I. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin.

2. Para los efectos de la interpretación de un tratado. el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos:

a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado;

b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado.

3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta:

a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones;

b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado;

c) toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes.

4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes.

Artículo 32: **Medios de interpretación complementarios**. Se podrán acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31, o para determinar el sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo 31:

a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o

b) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.

interpretación del objeto y fin del tratado o de los trabajos preparatorios, no se desprende necesariamente lo afirmado por México.

La Corte sostiene que la obligación se genera tan pronto se advierta que la persona es un nacional extranjero, o haya razones para pensar que probablemente lo sea, por lo que el momento preciso podría variar según las circunstancias. Bajo esta interpretación la Corte concluye que si bien a los cuatro nacionales mexicanos antes mencionados se les informó sobre sus derechos conforme al art. 36.1 b) de la CVRC, EEUU incumplió con su deber de hacerlo "sin demora".

A nuestro parecer, suscribiendo la opinión separada del fallo del magistrado Peter Tomka, en lo que respecta al derecho internacional, la detención en sí debiera "constituir un hecho objetivo suficiente para activar la obligación del Estado receptor"¹⁸, independientemente de que en el plano interno las autoridades de éste no hayan actuado diligentemente conforme los procedimientos internos para la identificación del individuo como nacional extranjero o que tales procedimientos no permitan una identificación eficaz y oportuna.

Un mecanismo para el cumplimiento de esta obligación es sugerida precisamente por la propia Corte:

*"The provision of such information could parallel the reading of those rights of which any person taken into custody in connection with a criminal offence must be informed prior to interrogation by virtue of what in the United States is known as the "Miranda rule" (...) The Court notes that, according to the United States, such a practice in respect of the Vienna Convention rights is already being followed in some local jurisdictions."*¹⁹

Cabe mencionar que en una posición convergente, al ser consultada la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH) sobre el sentido de la expresión "sin demora" en el artículo 36 de la CVRC, ésta consideró que la frase debe interpretarse en función de la finalidad que tiene respecto de quien ha sido privado de su libertad, por lo cual la notificación debe ser oportuna, tan pronto se produzca la detención y "en todo caso antes de que (el inculpado) rinda su primera declaración ante la autoridad"²⁰.

Estimamos que las notificaciones oportunas tanto al nacional extranjero de su derecho al acceso consular como a la oficina consular pueden facilitar el ejercicio también oportuno del derecho interrelacionado del Estado que envía de ejercer protección consular. Una notificación inmediata, no condicionada a los procedimientos internos del Estado receptor, como señalamos antes, contribuye también a reducir el grado de subjetividad para entender como satisfecha la obligación bajo el artículo 36.1 b).

¹⁸ Avena... Separate opinión of Judge Tomka, paragraph 15 (traducción propia).

¹⁹ Avena... Op Cit., paragraph 64.

²⁰ Opinión Consultiva OC -16/99 del 1 de octubre de 1999 de la Corte IDH, párrafo 106

3. PROBLEMA JURIDICO N° 3: ¿Puede México mediante el ejercicio de su derecho a la protección diplomática reclamar por la violación de los derechos de sus nacionales?

3.1. Sobre el ejercicio de la protección diplomática

Para responder esta interrogante, proponemos repasar primero algunos alcances sobre el ejercicio de la protección diplomática, entendida ésta como la reclamación de un Estado como medio para asegurar “la determinación de la responsabilidad por actos ilícitos que violan los derechos de los extranjeros, debido a daños causados a su persona.”²¹

Esta institución comprende normas de carácter consuetudinario que han sido recogidas en el Proyecto de Artículos sobre Protección Diplomática por la Comisión de Derecho Internacional (en adelante, el Proyecto PD). En su artículo 1 la define como:

“la invocación por parte de un Estado, a través de la acción diplomática u otros medios de arreglo pacífico de controversias, de la responsabilidad de otro por un perjuicio causado por un hecho internacionalmente ilícito de ese Estado a un persona natural o legal que es nacional del primer Estado con miras a la implementación de dicha responsabilidad.”

Como resultado de ello, el reclamo del nacional es asumido como propio por el Estado. Este principio fue invocado por la Corte Permanente de Justicia Internacional en el caso de la Concesión Palestina Mavrommatis:

“Al asumir el caso de uno de sus nacionales y recurrir a la acción diplomática o procedimientos judiciales internacionales en su nombre, un Estado en realidad está, afirmando su derecho propio, su derecho a garantizar en la persona de sus nacionales, el respeto a las reglas de derecho internacional”²²

Así, una vez presentado dicho reclamo ante un tribunal internacional, “para los ojos de este último el Estado es el único reclamante”²³. Con ello, que un Estado decida hacer suyo el reclamo de la vulneración de derechos de sus nacionales implica convertir dicho reclamo en uno interestatal, a ser evaluado en el marco de la responsabilidad internacional de los Estados.

La protección diplomática como un derecho de los Estados es recogida en el artículo 2 del Proyecto PD. Se desprende de ello que el Estado no tiene la obligación de extender la protección diplomática a sus nacionales en el extranjero, “aunque puede decirse que los nacionales tienen el derecho de solicitar a sus gobiernos a considerar dicha protección y que el gobierno tiene el deber de considerar el pedido racionalmente”²⁴

²¹ JIMENEZ DE ARECHAGA, Eduardo (1998) Responsabilidad internacional. En: SORENSEN, Max. Manual de Derecho Internacional Público, México: Fondo de Cultura Económica, p. 542.

²² Mavrommatis Palestine Concessions (1924). Permanent Court of Justice. Series A N° 2, p. 12 (traducción propia)

²³ SHAW, Malcolm N. (2008) International Law, Cambridge University Press, p. 810 (traducción propia)

²⁴ Loc. Cit. (traducción propia)

Seguidamente analizaremos los derechos reconocidos por el artículo 36 CVRC, su naturaleza y si podrían invocados por México en el ejercicio de su derecho a la protección diplomática de sus nacionales ante la Corte.

3.1.1. Sobre los derechos establecidos por el artículo 36 de la CVRC

Ya en el caso LaGrand la Corte había señalado que el artículo 36.1 de la CVRC establece un “régimen interrelacionado diseñado a facilitar la implementación de sistema de protección consular”²⁵. El artículo 36, párrafo 1.b), señala las obligaciones que el Estado receptor tiene con respecto a la persona detenida y al Estado que envía. En ese sentido, junto a obligaciones interestatales, mediante las cuales los Estados se reconocen entre sí derechos que les permiten a sus agentes consulares desarrollar las funciones recogidas en el artículo 5 de la CVRC²⁶, el artículo también “crea derechos individuales (para el nacional involucrado), que (...) pueden ser invocados en esta Corte por el Estado del detenido”²⁷, en caso de ser vulnerados; apreciación que la Corte reitera en el presente caso.

En este “régimen interrelacionado”, refiere la Corte, “la violación de los derechos del individuo puede involucrar la violación de los derechos del Estado que envía, mientras que la violación de los derechos de éste último pueden a su vez involucrar la violación de los del individuo”²⁸

Observamos entonces que las reclamaciones de México tienen una naturaleza “mixta”, puesto que comprenden afectaciones que dice haber sufrido tanto directa como indirectamente (esto último a través de la violación de los derechos reconocidos a sus nacionales).

Frente a esta modalidad de reclamación, lo que corresponde, a decir de la Comisión de Derecho Internacional, es que la Corte determine cuál afectación sería la “preponderante”. Para ello cabe preguntarse “si la reclamación hubiera sido presentada si no fuera por la afectación a los derechos de los nacionales”²⁹. Si la respuesta es negativa, entonces la reclamación preponderante será aquella basada en

²⁵ LaGrand (Germany v. United States of America), Judgment, I. C. J. Reports 2001, paragraph 74 (traducción propia)

²⁶ Artículo 5 de la CVRC:

“FUNCIONES CONSULARES

Las funciones consulares consistirán en:

a) proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que envía y de sus nacionales, sean personas naturales o jurídicas, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional;

(...)

e) prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que envía, sean personas naturales o jurídicas;

(...)

i) representar a los nacionales del Estado que envía o tomar las medidas convenientes para su representación ante los tribunales y otras autoridades del Estado receptor, de conformidad con la práctica y los procedimientos en vigor en este último, a fin de lograr que, de acuerdo con las leyes y reglamentos del mismo, se adopten las medidas provisionales de preservación de los derechos e intereses de esos nacionales, cuando, por estar ausentes o por cualquier otra causa, no puedan defenderlos oportunamente;

(...)”

²⁷ LaGrand... Op Cit., paragraph 77 (traducción propia)

²⁸ Avena..., Op Cit., paragraph 40 (traducción propia)

²⁹ INTERNATIONAL LAW COMMISSION (2006) Draft Articles on Diplomatic Protection with Commentaries, Commentary on Art. 14.3, paragraph 11 (traducción propia)

la afectación indirecta al Estado. Si bien es cierto que este examen es propuesto para la aplicación de la regla de agotamiento de recursos internos en el caso de reclamaciones mixtas, es igualmente aplicable para validar si estamos o no ante un caso de protección diplomática³⁰.

Sin embargo, la Corte no se plantea este análisis. Que México haya presentado las reclamaciones “en su nombre” le resulta suficiente a la Corte para concluir que ve innecesario abordar el caso como uno de protección diplomática. En nuestra opinión esto es incorrecto. Si se toma en cuenta que las reparaciones que México solicita son a favor de sus nacionales, que las medidas provisionales también han sido solicitadas en beneficio de aquellos, y que finalmente cada una de sus pretensiones se construye sobre la base de la vulneración de los derechos individuales, no existe sustento para contradecir que México decide actuar ante la Corte predominantemente para hacer valer los derechos de sus nacionales, para lo cual asume las reclamaciones como propias.

3.1.2. La Nacionalidad

Otro de los asuntos controvertidos en el caso es el referido a la supuesta doble nacionalidad de algunos individuos involucrados, según alega EEUU. Invoca al respecto que es un principio de derecho internacional que un Estado no puede ejercer protección diplomática contra otro sobre aquellos nacionales que son también nacionales de este último. Por extensión, el artículo 36 de la CVRC tampoco es aplicable a las personas que detentan la nacionalidad de ambos Estados.

Al pronunciarse sobre la objeción, la Corte no encuentra necesario analizar dicho argumento en el marco de la protección diplomática, puesto que entiende, tal como determinó respecto del agotamiento de recursos internos, que en el presente caso México también reclama por “su propio derecho” las vulneraciones al artículo 36 de la CVRC. Señala, por tanto, que la relación entre la doble nacionalidad y la norma será evaluada como una cuestión de fondo.

En este punto creemos conveniente recordar que “la nacionalidad es el enlace entre el individuo y su Estado en lo que respecta a beneficios y obligaciones. Es también el vínculo vital entre el individuo y los beneficios del derecho internacional”³¹

El Proyecto PD señala que el Estado facultado a ejercer protección diplomática es el de la nacionalidad, esto es, “el Estado cuya nacionalidad una persona natural ha adquirido de acuerdo con su ley interna, por nacimiento, descendencia, naturalización, sucesión de Estado u otra manera, no inconsistente con el derecho internacional” (artículo 4). De igual forma, este vínculo debe existir “a la fecha de la vulneración y debe continuar “hasta la fecha de la presentación oficial de la solicitud” (artículo 5.1)

Con relación al principio alegado por EEUU, hemos de señalar que éste no es de carácter absoluto. En la línea de lo que recuerda el magistrado Parra Aranguren al referirse a la decisión de México de retirar de su Memoria el caso de Enrique Zambrano, debido a que éste era también nacional estadounidense, la regla de la no invocación de protección diplomática respecto de una persona que es también

³⁰ Avena...Separate opinion of judge Vereshchetin, paragraph 7 (traducción propia)

³¹ SHAW Op Cit., p. 808-809

nacional del Estado demandado, admite una excepción: que la nacionalidad predominante sea la del Estado demandante³².

La regla tal cual ha sido recogida en el artículo 7 del Proyecto PD, que establece:

“Nacionalidad múltiple y reclamación frente a un Estado de la nacionalidad

Un Estado de la nacionalidad no podrá ejercer la protección diplomática con respecto a una persona frente a otro Estado del que esa persona sea también nacional, a menos que la nacionalidad del primer Estado sea predominante tanto en la fecha en la que se produjo el perjuicio como en la fecha de la presentación oficial de la reclamación”.
(subrayado nuestro)

En ese sentido, consideramos que si EEUU hubiera presentado pruebas de la nacionalidad estadounidense de alguno(s) de los nacionales mexicanos involucrados, que no hizo salvo en un caso al inicio de los procedimientos ante la Corte³³, ésta habría tenido que evaluar si en efecto la nacionalidad predominante era la mexicana, a efectos de reconocer que México podía ejercer la protección diplomática sobre aquel(los).

3.1.3. Sobre el agotamiento de recursos internos

Conforme a la costumbre internacional, antes que se inicien reclamaciones en el ámbito internacional, los recursos internos provistos por el supuesto Estado infractor deben ser agotados:

“La regla de que los recursos locales deben agotarse antes de poder establecerse procedimientos internacionales, es una regla de derecho internacional consuetudinario bien establecida”³⁴

Como señala Jiménez de Aréchaga, “la función de la regla es dar una oportunidad al Estado demandado, antes de que se le declare responsable internacionalmente, de hacer justicia de acuerdo con propio sistema jurídico” y tiene como fundamento el “respeto por la soberanía y jurisdicción del Estado que es competente para tratar la cuestión ante sus propios órganos judiciales”³⁵

Al respecto, el Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad de los Estados por Hechos Internacionalmente Ilícitos (en adelante Proyecto RI) recoge en su artículo 44 que la responsabilidad de un Estado no puede ser invocada si la reclamación es una respecto de la cual aplica la regla de agotamiento de recursos internos.

El Proyecto PD, en su artículo 14.1, reitera la regla indicando que:

“Un Estado no podrá presentar una reclamación internacional en razón de un perjuicio causado a uno de sus nacionales (...) antes de que la persona perjudicada haya agotado los recursos internos“

³² Avena... Separate opinion of judge Parra Aranguren, paragraph 14

³³ Se trata de la solicitud respecto de Enrique Zambrano, que México decidió retirar de su Memoria, luego de que EEUU probara que Zambrano era también nacional estadounidense.

³⁴ Interhandel Case, Preliminary Objections, I.C. J. Reports 1959, p. 27

³⁵ JIMENEZ DE ARECHAGA Op Cit., pp. 552-553

Como establecimos en el punto 3.1.1 al determinar que la reclamación de México es predominantemente de naturaleza indirecta, surge la cuestión respecto a la exigibilidad de la regla del agotamiento recursos internos en dicho supuesto.

Al respecto, cabe precisar que el Proyecto PD también recoge que el agotamiento de los recursos internos será obligatorio cuando “una reclamación internacional (..) se base predominantemente en un perjuicio causado a un nacional (...)” del Estado demandante (artículo 14.3 – subrayado nuestro)

Pero esta regla tampoco es absoluta, pues incluso cuando existan recursos disponibles, la regla puede no ser aplicable. Los supuestos de excepción que admite el derecho internacional están recogidos en el artículo 15 del Proyecto PD, entre ellos:

Artículo 15.1. “No será necesario agotar los recursos internos cuando:

- a) No haya razonablemente disponibles recursos internos que provean una reparación efectiva o los recursos internos no ofrezcan ninguna posibilidad razonable de obtener esa reparación.
(...)”

Un recurso devendrá en ineficaz “debido a obstáculos propios del derecho o del procedimiento interno”. Si los “recursos son obviamente incapaces de lograr una reparación, entonces se omite la obligación de agotar dichos recursos”³⁶.

Al referirse a los alcances del examen y reconsideración de las declaraciones de culpabilidad y condenas de los nacionales mexicanos, la Corte observa que conforme los procedimientos penales estadounidenses vigentes, si durante el proceso judicial el nacional extranjero, pudiendo hacerlo, no invocó la vulneración de sus derechos contenidos en el artículo 36 de la CVRC, no podrá alegarlo en apelaciones judiciales ulteriores, debido a la aplicación que realizan los tribunales estadounidense de la regla de preclusión procesal. Así, “debido a la regla de la preclusión procesal, tal como se aplica actualmente, el inculpado es efectivamente impedido de plantear la cuestión de la violación de sus derechos de acuerdo con el artículo 36 de la CVRC”³⁷

En ese marco, podemos afirmar que a consecuencia de la regla de preclusión procesal, los recursos internos disponibles a los nacionales extranjeros involucrados no les ofrecen una posibilidad razonable de contar con una reparación eficaz del daño, con lo que dejan de ser exigibles para habilitar al Estado demandante a ejercer protección diplomática sobre sus nacionales.

De la misma manera, al declarar la Corte que el examen y reconsideración han de ser eficaces, esto es, tomar en consideración la violación de los derechos establecidos en la CVRC, la Corte señala que el procedimiento de clemencia tampoco es eficaz, pues no garantiza una revisión tanto de la culpabilidad como de las condenas, por lo que, concluye, no constituye un medio apropiado de examen y reconsideración.

Sobre el particular, cabe señalar que en sus comentarios al artículo 14.2 del Proyecto respecto a lo que se considera “recurso interno”, la Comisión de Derecho Internacional señala que los recursos internos no incluyen aquellos cuyo “propósito sea obtener un

³⁶ Ibid, p. 556

³⁷ Avena ... paragraph 134 (traducción propia)

favor y no hacer valer un derecho ni tampoco a los recursos de gracia”, comprendiendo dentro de esta categoría a los procedimientos de clemencia³⁸.

Por lo tanto, si bien es cierto que, a excepción de tres, en todos los casos individuales presentados por México ante la Corte, técnicamente, existían recursos internos disponibles por agotar conforme al artículo 14.1 del Proyecto PD, éstos, según lo había reconocido la propia Corte, no ofrecían las garantías de un procedimiento judicial que tomara en cuenta la afectación de sus derechos consagrados en la CVRC.

Por lo expuesto, suscribimos lo señalado por el magistrado Tomka respecto a que “hubiese sido posible para la Corte concluir que México había probado que la condición del agotamiento de recursos internos no aplicaba en el presente caso a su reclamación en base a la protección diplomática”³⁹

4. PROBLEMA JURIDICO N° 4: ¿En qué consiste la obligación de reparar en el presente caso?

El hecho internacionalmente ilícito, siendo este en el presente caso el incumplimiento de obligaciones emanadas del artículo 36.1 de la CVRC por parte de EEUU, genera la responsabilidad internacional (según lo recoge artículo 2 del Proyecto RI) del Estado infractor. Constatado ello, la Corte se aboca a examinar las consecuencias del hecho ilícito y la reparación a ser determinada.

El principio rector de la reparación ante el incumplimiento de una obligación internacional fue invocado en el caso de la Fábrica Chorzow, en el que la Corte Permanente de Justicia Internacional señaló que “es un principio del derecho internacional que el incumplimiento de un compromiso entraña la obligación de efectuar una reparación en forma adecuada”⁴⁰

Este principio se encuentra incorporado en el Proyecto RI, al reconocerse que “el Estado responsable está obligado a reparar íntegramente el perjuicio causado por el hecho internacionalmente ilícito” (artículo 31). Asimismo, en el artículo 34 se establece que la “reparación íntegra del perjuicio causado por el hecho internacionalmente ilícito adoptará la forma de restitución, de indemnización y de satisfacción, ya sea de manera única o combinada”

A efecto de determinar la reparación adecuada en el presente caso, la Corte se pregunta qué es lo que dicha reparación debe compensar.

4.1. ¿Debe la reparación compensar las violaciones al artículo 36 de la CVRC o las declaratorias de culpabilidad y condenas?

México sostiene, entre otros, que tiene derecho a una reparación íntegra, en la forma de *restitutio in integrum*. Ello comprende restaurar el *statu quo ante*, que a su juicio, implica se anule o deje sin efecto las declaraciones de culpabilidad y condenas de sus 52 nacionales. También incluye la obligación de adoptar las medidas necesarias para

³⁸ INTERNATIONAL LAW COMMISSION Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries. Commentary on Art. 14.1, p. 45, paragraph 5. (traducción propia).

³⁹ Avena... Separate opinion of judge Tomka, paragraph 13 (traducción propia).

⁴⁰ Chorzow Factory case. PCIJ, Series A, 1928, N° 17, p. 47 (traducción propia).

asegurar que la violación del artículo 36 de la CVRC no afecte los subsiguientes procedimientos.

Sobre la base de que lo que constituye una reparación adecuada “varía según las circunstancias de cada caso y la naturaleza y alcances precisos del perjuicio”, la Corte recuerda que en el presente caso el hecho internacionalmente ilícito cometido por EEUU comprende el incumplimiento de sus obligaciones conforme al artículo 36 de la CVRC, siendo éstas: “informar a los nacionales mexicanos involucrados, notificar a las oficinas consulares respectivas y permitir a México brindar asistencia consular”⁴¹. Lo que la reparación adecuada debe compensar, en ese sentido, son las violaciones del artículo 36 de la CVRC por parte de EEUU, y no las declaraciones de culpabilidad y condenas de los nacionales mexicanos, que es lo que pretende México.

En la línea de lo que decidió en el caso LaGrand, la Corte declara que la reparación adecuada consiste en la obligación de EEUU de, por los medios de su libre elección, “permitir el examen y la reconsideración de los casos de los nacionales mexicanos por los tribunales estadounidenses, con miras a verificar si en cada caso la violación del artículo 36 (...) causó un perjuicio efectivo al imputado en el proceso de administración de justicia penal”⁴² (subrayado nuestro)

Resalta, asimismo, que el examen y reconsideración deben ser “eficaces”, esto es tener en cuenta la violación de los derechos consagrados en la CVRC y garantizar que los posibles perjuicios causados por ella sean plenamente examinados. Asimismo, señala como medio adecuado para cumplir esa obligación el judicial.

Creemos que la decisión de la Corte no debe ser entendida como un rechazo al restablecimiento del *statu quo ante* como la reparación adecuada, sino más bien a la pretensión de que la única forma de lograr dicho restablecimiento sea a través de la anulación de las condenas. En ese contexto, como refiere el profesor Cesáreo Gutiérrez Espada, producido el hecho internacionalmente ilícito, “restablecer la situación que hubiera existido de no cometerse consistiría simplemente en revisar los procesos para que los condenados gocen de esa asistencia consular”⁴³, sin perjuicio que de la revisión resulte la confirmación o no de las condenas y sentencias.

4.2. Sobre la naturaleza de los derechos de los individuos contenidos en el artículo 36 de la CVRC

Como se adelantó en el punto 1.4., México sostiene que el derecho a la notificación y comunicación consular es un derecho humano fundamental que constituye parte del debido proceso. Aduce, por tanto, que su infracción produce el efecto de viciar todo el procedimiento penal llevado a cabo en violación de ese derecho.

Por su parte la Corte declara que si los derechos reconocidos a individuos en el artículo 36 son o no derechos humanos “no es un asunto sobre el que deba decidir”. Añade que ni el texto, el objeto ni el fin del tratado sustentan lo aseverado por México.

Entendida la CVRC como la principal fuente del derecho consular, lo señalado por la Corte se vincula con lo que el preámbulo de dicha Convención recoge con relación a

⁴¹ Avena..., paragraph 121

⁴² Loc. cit

⁴³ GUTIERREZ ESPADA, Cesáreo (2005) La responsabilidad internacional (Las consecuencias del hecho ilícito), Murcia: DM Librero-Editor, p.57

su finalidad: contribuir al desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones y garantizar a las oficinas consulares el eficaz desempeño de sus funciones en nombre de sus respectivos Estados. En ese sentido, “la violación del artículo 36 quebranta la base misma de las funciones consulares”⁴⁴.

4.3. Los derechos reconocidos al individuo en el art. 36 de la CVRC según la Corte IDH

Consultada en 1999 por México si el artículo 36 de la CVRC contenía “disposiciones concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos”, la Corte IDH reconoció que dicho artículo tiene un carácter excepcional frente a “la naturaleza esencialmente estatal, de los derechos y obligaciones consagrados en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares”⁴⁵, en tanto reconoce a los nacionales extranjeros los derechos de información y notificación consular.

Atendiendo a la evolución de los derechos fundamentales en el derecho internacional, la Corte IDH señala que el debido proceso viene incorporando nuevas garantías judiciales, entre ellas la comunicación consular amparada por el artículo 36 de la CVRC, que “conciene a la protección de los derechos del nacional del Estado que envía y puede redundar en beneficio de aquel”⁴⁶. El ejercicio de los derechos de información y notificación consular, sostiene, contribuye a mejorar las posibilidades de defensa de los nacionales extranjeros, compensando la “desigualdad real” que puedan enfrentar extranjeros que son llevados ante la justicia⁴⁷. En tal sentido, el derecho individual de información recogido en el artículo 36.1 b) “permite que adquiera eficacia, en los casos concretos, el debido proceso legal”⁴⁸. Como apuntan Salmón y Blanco, tal desigualdad real se evidenciaría en “el reconocimiento de las dificultades de índole económica, social o de lenguaje, por las que puede atravesar un individuo en un país distinto al suyo”⁴⁹.

4.4. Sobre la determinación de la reparación debida.

Sobre la base de lo expuesto, coincidimos con la Corte en cuanto a que como consecuencia del incumplimiento por parte de EEUU de sus obligaciones conforme al artículo 36 de la CVRC, EEUU incurre en responsabilidad internacional, generándole la obligación de reparar el perjuicio ocasionado por la vulneración de los derechos a la información y notificación consulares de los nacionales mexicanos involucrados.

Suscribimos, asimismo, que la reparación adecuada en este caso comprende que EEUU permita a los referidos nacionales el examen y reconsideración de los veredictos de culpabilidad y condenas por parte de las cortes estadounidenses. Que este deber de reparar sea efectivo, en nuestra opinión, no se agota en exigir que el

⁴⁴ DAVEREDE, Alberto L. y GODIO, Leopoldo. (2013) Evolución y actualidad de la asistencia consular. La protección de la persona humana en los fallos de la Corte Internacional de Justicia. p.81. En: La jurisprudencia reciente y el derecho internacional / 1a ed. - Buenos Aires : Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales-CARI

⁴⁵ Opinión Consultiva de la Corte IDH, Op Cit., párrafo 82

⁴⁶ Ibid, párrafo 87.

⁴⁷ Ibid, párrafo 119

⁴⁸ Ibid, párrafo 124

⁴⁹ SALMON, Elizabeth y BLANCO, Cristina (2012). El derecho al debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Lima: IDEHPUCP, p. 306

examen y reconsideración se tome en consideración las violaciones a los derechos contenidos en el artículo 36, sino que se extiende a que los tribunales locales garanticen que se examinará el posible perjuicio causado al imputado a consecuencia de la violación de tales derechos, en especial su implicancia respecto a eventuales vulneraciones a las garantías del debido proceso. Este último aspecto fue resaltado por la Corte con ocasión de su reciente fallo del caso Jadhav (India vs Pakistán), también acerca del incumplimiento de obligaciones emanadas del art. 36 de la CVRC, en el que la Corte ratificó su posición respecto al carácter apropiado de esta reparación⁵⁰.

Asimismo, y como fue posteriormente reconocido por la Corte con ocasión de la solicitud de México de interpretación del fallo del presente caso, consideramos que la reparación impuesta a EEUU comporta una obligación de “resultados, que ha de ser cumplida incondicionalmente”⁵¹, lo que implica el deber de dicho Estado de implementar las medidas necesarias que hagan posible que las declaratorias de culpabilidad y sentencias de los nacionales a los que se les privó sus derechos conforme al art. 36 de la CVRC, sean revisadas y reconsideradas judicialmente. Como también lo ratificó la Corte en 2019, tales medidas debieran de incluir “si es necesaria, la adopción de legislación apropiada” que conduzca a tal fin⁵².

En el presente caso planteado ante la Corte, cuya competencia está limitada a lo que las Partes han acordado someter a ella (esto es, una controversia respecto a la interpretación y/o aplicación de la CVRC), la reparación que impone aquella se circunscribe a compensar el hecho internacionalmente ilícito que calza dentro de su competencia, esto es, la violación del artículo 36 de la CVRC, garantizando a los condenados el ejercicio de su derecho al acceso consular.

La determinación de si las violaciones del derecho a la información sobre asistencia consular establecidos por la CVRC comprometieron el desarrollo del debido proceso de conformidad con normas del derecho internacional de los derechos humanos como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, recaerá en los tribunales estadounidenses y ha de ser efectuada en función a las circunstancias del caso individual concreto, tal como creemos que lo entiende la propia Corte IDH⁵³. En este proceso será esencial verificar la existencia y, de ser el caso, grado de “desigualdad real” que enfrentan o enfrentaron los nacionales involucrados, sin dejar de mencionar la importancia de desarrollar exámenes especialmente rigurosos en casos que involucran la pena capital, a fin de evitar consecuencias injustas de carácter irreversible⁵⁴.

⁵⁰ Jadhav (India v. Pakistan) Judgment, I.C.J. Reports 2019, paragraph 145 (traducción propia)

⁵¹ Request for Interpretation of the Judgment of 31 March 2004 in the Case concerning Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America) (Mexico v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2009, paragraph 44 (traducción propia)

⁵² Jadhav...Op Cit., paragraph 146 (traducción propia)

⁵³ “En otros términos, el derecho individual de información establecido en el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares permite que adquiera eficacia, en los casos concretos, el derecho al debido proceso legal (...)” (subrayado nuestro) (Opinión Consultiva OC 16/99, párrafo 124)

⁵⁴ “Every possible measure should therefore be taken to prevent injustice or an error in conviction or sentencing” En: LaGrand ...Separate opinion of judge Shi, paragraph 17

V. CONCLUSIONES

1. La presente controversia entre México y EEUU es una que surge con relación a interpretación y aplicación de las obligaciones que a las que están comprometido tanto México como EEUU, ambos Estados parte de la CVRC y su Protocolo Facultativo concerniente al Arreglo Pacífico de Controversias, el mismo que establece que, frente a tales supuestos, la Corte será competente para conocer dicha causa y decidir respecto de ella.
2. El artículo 79.1 del Reglamento de la Corte establece un plazo para la presentación de excepciones a la jurisdicción como a la admisibilidad de la demanda y no solo a las denominadas preliminares. No se entendería el objeto de la regla si es que excepciones preliminares a la jurisdicción o admisibilidad estuvieran sujetas a un plazo, mientras que objeciones sobre las mismas categorías puedan ser admitidas sin mediar dicho condicionamiento, aunque desprovistas de eficacia (y utilidad) en caso sean declaradas procedentes, al supuestamente no poder suspender los procedimientos sobre el fondo. Ello, aunado a la conducta demostrada por EEUU, nos lleva a concluir que la Corte debió declarar inadmisibles las objeciones preliminares formuladas dicho Estado a la competencia de la Corte y a admisibilidad de la demanda.
3. Si bien coincidimos que la regla de agotar los recursos internos no aplica en el presente caso, no acompañamos el razonamiento seguido por la Corte para justificarlo. De otro lado, consideramos que el hecho que no aplique la mencionada regla no implica necesariamente que éste no sea un caso de protección diplomática.
4. La Corte sostiene que la obligación de informar “sin demora” conforme al artículo 36 de la CVRC se genera tan pronto el Estado tome conocimiento que la persona es un nacional extranjero, o haya razones para pensar que probablemente lo sea, por lo que el momento preciso podría variar según las circunstancias. Bajo esta interpretación la Corte concluye que EEUU incumplió con su deber de informar “sin demora”.
5. Consideramos que la detención en sí debiera constituir un hecho objetivo suficiente para activar la obligación del Estado receptor. Estimamos que las notificaciones oportunas tanto al nacional extranjero de su derecho al acceso consular como a la oficina consular pueden facilitar el ejercicio también oportuno del derecho interrelacionado del Estado que envía de ejercer protección consular. Una notificación inmediata, no condicionada a los procedimientos internos del Estado receptor, como señalamos antes, contribuye también a reducir el grado de subjetividad para entender como satisfecha la obligación emanada del artículo 36.1 b).
6. El artículo 36, párrafo 1.b), señala las obligaciones que el Estado receptor tiene con respecto a la persona detenida y al Estado que envía. En ese sentido, junto a obligaciones interestatales, mediante las cuales los Estados se reconocen entre sí derechos que les permiten a sus agentes consulares desarrollar sus funciones, el artículo también crea derechos individuales que, en caso sean vulnerados, pueden ser invocados ante la Corte por el Estado del nacional.
7. Las reclamaciones de México ante la Corte tienen una naturaleza “mixta”, puesto que comprenden afectaciones que dice haber sufrido tanto directa como indirectamente (esto último a través de la violación de los derechos reconocidos a sus nacionales). Frente a esta modalidad de reclamación, lo que

- corresponde es que la Corte determine cuál afectación sería la “preponderante”.
8. Atendiendo a que las reparaciones que México solicita son a favor de sus nacionales, que las medidas provisionales también han sido solicitadas en beneficio de aquellos, y que finalmente cada una de sus pretensiones se construye sobre la base de la vulneración de los derechos de sus nacionales, no existe sustento para contradecir que México decide actuar ante la Corte predominantemente para hacer valer los derechos de sus nacionales, para lo cual asume las reclamaciones como propias y, por tanto, ejerce su derecho a la protección diplomática.
 9. Consideramos que si EEUU hubiera presentado pruebas de la nacionalidad estadounidense de alguno(s) de los nacionales mexicanos involucrados, que no hizo pese a que lo alegaba, la Corte habría tenido que evaluar si en efecto la nacionalidad predominante era la mexicana, a efectos de reconocer que México podía ejercer la protección diplomática sobre aquel(los).
 10. A consecuencia de la regla de preclusión procesal aplicada por los tribunales estadounidenses, los recursos internos disponibles a los nacionales extranjeros involucrados no les ofrecen una posibilidad razonable de contar con una reparación eficaz del daño, con lo que dejan de ser exigibles para habilitar al Estado demandante a ejercer protección diplomática sobre sus nacionales.
 11. La Corte decide que la reparación adecuada debe compensar las violaciones del artículo 36 de la CVRC por parte de EEUU, y no las declaraciones de culpabilidad y condenas de los nacionales mexicanos. Así, la reparación adecuada consiste en la obligación de EEUU, por los medios de su libre elección, de permitir el examen y la reconsideración de los casos individuales por parte de los tribunales estadounidenses, con miras a verificar si en cada uno de ellos la violación del artículo 36 causó un perjuicio efectivo al imputado en el proceso judicial.
 12. La competencia de la Corte en este caso está limitada a lo que las Partes han acordado someter a ella (esto es, una controversia respecto a la interpretación y/o aplicación de la CVRC). En ese marco, corresponde que la reparación que impone aquella busque la compensación del hecho internacionalmente ilícito que calza dentro de su competencia, esto es, la violación del artículo 36 de la CVRC, lo que implica la revisión de los procesos, garantizando que los condenados puedan ejercer su derecho al acceso consular.

VI. FUENTES BIBLIOGRAFICAS

Fuentes materiales:

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL

- Proyecto de Artículos sobre Protección Diplomática (2006)
- Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad de los Estados por Hechos Internacionalmente Ilícitos (2001)

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

- Opinión Consultiva OC-16/99 - "El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal"

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

- Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America), Provisional Measures, Order of 5 February 2003, I. C. J. Reports 2003
- Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America), Judgment, I. C. J. Reports 2004
- Interhandel Case, Preliminary Objections, I.C. J. Reports 1959
- Jadhav (India v. Pakistan) Judgment, I.C.J. Reports 2019
- LaGrand (Germany v. United States of America), Judgment, I. C. J. Reports 2001
- Request for Interpretation of the Judgment of 31 March 2004 in the Case concerning Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America) (Mexico v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2009
- Vienna Convention on Consular Relations (Paraguay v. United States of America), Provisional Measures, Order of 9 April 1998, I. C. J. Reports 1998

CORTE PERMANENTE DE JUSTICIA INTERNACIONAL

- Chorzow Factory Case
- Mavrommatis Palestine Concessions

DAVEREDE, Alberto L. y GODIO, Leopoldo (2013) Evolución y actualidad de la asistencia consular. La protección de la persona humana en los fallos de la Corte Internacional de Justicia. En: La jurisprudencia reciente y el derecho internacional / 1a ed. - Buenos Aires: Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales-CARI.

GOMEZ ROBLEDO, Juan Manuel (2005) El caso Avena y otros nacionales mexicanos ante la Corte Internacional de Justicia, En: Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. V, UNAM

GUTIERREZ ESPADA, Cesáreo (2005) La responsabilidad internacional (Las consecuencias del hecho ilícito), Murcia: DM Librero-Editor.

JIMENEZ DE ARECHAGA, Eduardo (1998) Responsabilidad Internacional. En: SORENSEN, Max (1998) Manual de Derecho Internacional Público. México: Fondo de Cultura Económica.

SALMON, Elizabeth y BLANCO, Cristina (2012) El derecho al debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lima: IDEHPUCP.

SHAW, Malcolm N. (2008) International Law. Sixth Edition. Cambridge University Press.

Fuentes de consulta:

GONZALEZ NAPOLITANO, Silvina et. al. (2013) La responsabilidad internacional del Estado por violación de los derechos humanos: sus particularidades frente al derecho internacional general. 1a ed. - Avellaneda: SGN Editora.

NOVAK, Fabián y GARCIA-CORROCHANO, Luis

- (2001) Derecho Internacional Público. Tomo II: Sujetos de Derecho Internacional. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- (2005) Derecho Internacional Público. Tomo III: Solución pacífica de controversias. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

PETIT DE GABRIEL, Eulalia (2017) Los “derechos consulares” de los extranjeros detenidos: ¿nuevas cartas en la baraja de los derechos fundamentales? En: Revista Electrónica de Estudios Internacionales N° 33, DOI: 10.17103/reei.33.07 (<http://www.reei.org/index.php/revista/num33>). Consulta: 05/11/2020

SORENSEN, Max (1998) Manual de Derecho Internacional Público. México: Fondo de Cultura Económica.

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING AVENA AND OTHER
MEXICAN NATIONALS

(MEXICO v. UNITED STATES OF AMERICA)

JUDGMENT OF 31 MARCH 2004

2004

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE AVENA ET AUTRES
RESSORTISSANTS MEXICAINS

(MEXIQUE c. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE)

ARRÊT DU 31 MARS 2004

Official citation:

Avena and Other Mexican Nationals
(*Mexico v. United States of America*),
Judgment, *I.C.J. Reports 2004*, p. 12

Mode officiel de citation:

Avena et autres ressortissants mexicains
(*Mexique c. Etats-Unis d'Amérique*),
arrêt, *C.I.J. Recueil 2004*, p. 12

ISSN 0074-4441
ISBN 92-1-070989-6

Sales number
N° de vente:

880

31 MARCH 2004

JUDGMENT

AVENA AND OTHER MEXICAN NATIONALS
(MEXICO *v.* UNITED STATES OF AMERICA)

AVENA ET AUTRES RESSORTISSANTS MEXICAINS
(MEXIQUE *c.* ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE)

31 MARS 2004

ARRÊT

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

YEAR 2004

31 March 2004

2004
31 March
General List
No. 128CASE CONCERNING AVENA AND OTHER
MEXICAN NATIONALS

(MEXICO v. UNITED STATES OF AMERICA)

Facts of the case — Article 36 of the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963.

* *

Mexico's objection to the United States objections to jurisdiction and admissibility — United States objections not presented as preliminary objections — Article 79 of Rules of Court not pertinent in present case.

* *

Jurisdiction of the Court.

First United States objection to jurisdiction — Contention that Mexico's submissions invite the Court to rule on the operation of the United States criminal justice system — Jurisdiction of Court to determine the nature and extent of obligations arising under Vienna Convention — Enquiry into the conduct of criminal proceedings in United States courts a matter belonging to the merits.

Second United States objection to jurisdiction — Contention that the first submission of Mexico's Memorial is excluded from the Court's jurisdiction — Mexico defending an interpretation of the Vienna Convention whereby not only the absence of consular notification but also the arrest, detention, trial and conviction of its nationals were unlawful, failing such notification — Interpretation of Vienna Convention a matter within the Court's jurisdiction.

Third United States objection to jurisdiction — Contention that Mexico's submissions on remedies go beyond the Court's jurisdiction — Jurisdiction of Court to consider the question of remedies — Question whether or how far the Court may order the requested remedies a matter belonging to the merits.

Fourth United States objection to jurisdiction — Contention that the Court lacks jurisdiction to determine whether or not consular notification is a human right — Question of interpretation of Vienna Convention.

* *

Admissibility of Mexico's claims.

First United States objection to admissibility — Contention that Mexico's submissions on remedies seek to have the Court function as a court of criminal appeal — Question belonging to the merits.

Second United States objection to admissibility — Contention that Mexico's claims to exercise its right of diplomatic protection are inadmissible on grounds that local remedies have not been exhausted — Interdependence in the present case of rights of the State and of individual rights — Mexico requesting the Court to rule on the violation of rights which it suffered both directly and through the violation of individual rights of its nationals — Duty to exhaust local remedies does not apply to such a request.

Third United States objection to admissibility — Contention that certain Mexican nationals also have United States nationality — Question belonging to the merits.

Fourth United States objection to admissibility — Contention that Mexico had actual knowledge of a breach but failed to bring such breach to the attention of the United States or did so only after considerable delay — No contention in the present case of any prejudice caused by such delay — No implied waiver by Mexico of its rights.

Fifth United States objection to admissibility — Contention that Mexico invokes standards that it does not follow in its own practice — Nature of Vienna Convention precludes such an argument.

* *

Article 36, paragraph 1 — Mexican nationality of 52 individuals concerned — United States has not proved its contention that some were also United States nationals.

Article 36, paragraph 1 (b) — Consular information — Duty to provide consular information as soon as arresting authorities realize that arrested person is a foreign national, or have grounds for so believing — Provision of consular information in parallel with reading of "Miranda rights" — Contention that seven individuals stated at the time of arrest that they were United States nationals — Interpretation of phrase "without delay" — Violation by United States of the obligation to provide consular information in 51 cases.

Consular notification — Violation by United States of the obligation of consular notification in 49 cases.

Article 36, paragraph 1 (a) and (c) — Interrelated nature of the three subparagraphs of paragraph 1 — Violation by United States of the obligation to enable Mexican consular officers to communicate with, have access to and visit their nationals in 49 cases — Violation by United States of the obligation to

enable Mexican consular officers to arrange for legal representation of their nationals in 34 cases.

Article 36, paragraph 2 — "Procedural default" rule — Possibility of judicial remedies still open in 49 cases — Violation by United States of its obligations under Article 36, paragraph 2, in three cases.

* *

Legal consequences of the breach.

Question of adequate reparation for violations of Article 36 — Review and reconsideration by United States courts of convictions and sentences of the Mexican nationals — Choice of means left to United States — Review and reconsideration to be carried out by taking account of violation of Vienna Convention rights — "Procedural default" rule.

Judicial process suited to the task of review and reconsideration — Clemency process, as currently practised within the United States criminal justice system, not sufficient in itself to serve as appropriate means of "review and reconsideration" — Appropriate clemency procedures can supplement judicial review and reconsideration.

Mexico requesting cessation of wrongful acts and guarantees and assurances of non-repetition — No evidence to establish "regular and continuing" pattern of breaches by United States of Article 36 of Vienna Convention — Measures taken by United States to comply with its obligations under Article 36, paragraph 1 — Commitment undertaken by United States to ensure implementation of its obligations under that provision.

* *

No a contrario argument can be made in respect of the Court's findings in the present Judgment concerning Mexican nationals.

* *

United States obligations declared in Judgment replace those arising from Provisional Measures Order of 5 February 2003 — In the three cases where the United States violated its obligations under Article 36, paragraph 2, it must find an appropriate remedy having the nature of review and reconsideration according to the criteria indicated in the Judgment.

JUDGMENT

Present: President SHI; Vice-President RANJEVA; Judges GUILLAUME, KOROMA, VERESHCHETIN, HIGGINS, PARRA-ARANGUREN, KOOJMANS, REZEK, AL-KHASAWNEH, BUERGENTHAL, ELARABY, OWADA, TOMKA; Judge ad hoc SEPULVEDA; Registrar COUVREUR.

In the case concerning Avena and other Mexican nationals,

between

the United Mexican States,
represented by

H.E. Mr. Juan Manuel Gómez-Robledo, Ambassador, former Legal Adviser,
Ministry of Foreign Affairs, Mexico City,
as Agent;

H.E. Mr. Santiago Oñate, Ambassador of Mexico to the Kingdom of the
Netherlands,
as Agent (until 12 February 2004);

Mr. Arturo A. Dager, Legal Adviser, Ministry of Foreign Affairs, Mexico
City,

Ms María del Refugio González Domínguez, Chief, Legal Co-ordination
Unit, Ministry of Foreign Affairs, Mexico City,
as Agents (from 2 March 2004);

H.E. Ms Sandra Fuentes Berain, Ambassador-Designate of Mexico to the
Kingdom of the Netherlands,
as Agent (from 17 March 2004);

Mr. Pierre-Marie Dupuy, Professor of Public International Law at the
University of Paris II (Panthéon-Assas) and at the European University
Institute, Florence,

Mr. Donald Francis Donovan, Attorney at Law, Debevoise & Plimpton,
New York,

Ms Sandra L. Babcock, Attorney at Law, Director of the Mexican Capital
Legal Assistance Programme,

Mr. Carlos Bernal, Attorney at Law, Noriega y Escobedo, and Chairman of
the Commission on International Law at the Mexican Bar Association,
Mexico City,

Ms Katherine Birmingham Wilmore, Attorney at Law, Debevoise &
Plimpton, London,

Mr. Dietmar W. Prager, Attorney at Law, Debevoise & Plimpton, New
York,

Ms Socorro Flores Liera, Chief of Staff, Under-Secretariat for Global Affairs
and Human Rights, Ministry of Foreign Affairs, Mexico City,

Mr. Victor Manuel Uribe Aviña, Head of the International Litigation Sec-
tion, Legal Adviser's Office, Ministry of Foreign Affairs, Mexico City,

as Counsellors and Advocates;

Mr. Erasmo A. Lara Cabrera, Head of the International Law Section, Legal
Adviser's Office, Ministry of Foreign Affairs, Mexico City,

Ms Natalie Klein, Attorney at Law, Debevoise & Plimpton, New York,

Ms Catherine Amirfar, Attorney at Law, Debevoise & Plimpton, New York,

Mr. Thomas Bollyky, Attorney at Law, Debevoise & Plimpton, New York,
Ms Cristina Hoss, Research Fellow at the Max Planck Institute for Com-
parative Public Law and International Law, Heidelberg,

Mr. Mark Warren, International Law Researcher, Ottawa,
as Advisers;

Mr. Michel L'Enfant, Debevoise & Plimpton, Paris,
as Assistant,

and

the United States of America,
represented by

The Honourable William H. Taft, IV, Legal Adviser, United States Department of State,

as Agent;

Mr. James H. Thessin, Principal Deputy Legal Adviser, United States Department of State,

as Co-Agent;

Ms Catherine W. Brown, Assistant Legal Adviser for Consular Affairs, United States Department of State,

Mr. D. Stephen Mathias, Assistant Legal Adviser for United Nations Affairs, United States Department of State,

Mr. Patrick F. Philbin, Associate Deputy Attorney General, United States Department of Justice,

Mr. John Byron Sandage, Attorney-Adviser for United Nations Affairs, United States Department of State,

Mr. Thomas Weigend, Professor of Law and Director of the Institute of Foreign and International Criminal Law, University of Cologne,

Ms Elisabeth Zoller, Professor of Public Law, University of Paris II (Panthéon-Assas),

as Counsel and Advocates;

Mr. Jacob Katz Cogan, Attorney-Adviser for United Nations Affairs, United States Department of State,

Ms Sara Criscitelli, Member of the Bar of the State of New York,

Mr. Robert J. Erickson, Principal Deputy Chief, Criminal Appellate Section, United States Department of Justice,

Mr. Noel J. Francisco, Deputy Assistant Attorney General, Office of Legal Counsel, United States Department of Justice,

Mr. Steven Hill, Attorney-Adviser for Economic and Business Affairs, United States Department of State,

Mr. Clifton M. Johnson, Legal Counsellor, United States Embassy, The Hague,

Mr. David A. Kaye, Deputy Legal Counsellor, United States Embassy, The Hague,

Mr. Peter W. Mason, Attorney-Adviser for Consular Affairs, United States Department of State,

as Counsel;

Ms Barbara Barrett-Spencer, United States Department of State,

Ms Marianne Hata, United States Department of State,

Ms Cecile Jouglet, United States Embassy, Paris,

Ms Joanne Nelligan, United States Department of State,

Ms Laura Romains, United States Embassy, The Hague,

as Administrative Staff,

THE COURT,

composed as above,
after deliberation,

delivers the following Judgment:

1. On 9 January 2003 the United Mexican States (hereinafter referred to as "Mexico") filed in the Registry of the Court an Application instituting proceedings against the United States of America (hereinafter referred to as the "United States") for "violations of the Vienna Convention on Consular Relations" of 24 April 1963 (hereinafter referred to as the "Vienna Convention") allegedly committed by the United States.

In its Application, Mexico based the jurisdiction of the Court on Article 36, paragraph 1, of the Statute of the Court and on Article I of the Optional Protocol concerning the Compulsory Settlement of Disputes, which accompanies the Vienna Convention (hereinafter referred to as the "Optional Protocol").

2. Pursuant to Article 40, paragraph 2, of the Statute, the Application was forthwith communicated to the Government of the United States; and, in accordance with paragraph 3 of that Article, all States entitled to appear before the Court were notified of the Application.

3. On 9 January 2003, the day on which the Application was filed, the Mexican Government also filed in the Registry of the Court a request for the indication of provisional measures based on Article 41 of the Statute and Articles 73, 74 and 75 of the Rules of Court.

By an Order of 5 February 2003, the Court indicated the following provisional measures:

- "(a) The United States of America shall take all measures necessary to ensure that Mr. César Roberto Fierro Reyna, Mr. Roberto Moreno Ramos and Mr. Osvaldo Torres Aguilera are not executed pending final judgment in these proceedings;
- (b) The Government of the United States of America shall inform the Court of all measures taken in implementation of this Order."

It further decided that, "until the Court has rendered its final judgment, it shall remain seized of the matters" which formed the subject of that Order.

In a letter of 2 November 2003, the Agent of the United States advised the Court that the United States had "informed the relevant state authorities of Mexico's application"; that, since the Order of 5 February 2003, the United States had "obtained from them information about the status of the fifty-four cases, including the three cases identified in paragraph 59 (I) (a) of that Order"; and that the United States could "confirm that none of the named individuals [had] been executed".

4. In accordance with Article 43 of the Rules of Court, the Registrar sent the notification referred to in Article 63, paragraph 1, of the Statute to all States parties to the Vienna Convention or to that Convention and the Optional Protocol.

5. By an Order of 5 February 2003, the Court, taking account of the views of the Parties, fixed 6 June 2003 and 6 October 2003, respectively, as the time-limits for the filing of a Memorial by Mexico and of a Counter-Memorial by the United States.

6. By an Order of 22 May 2003, the President of the Court, on the joint request of the Agents of the two Parties, extended to 20 June 2003 the time-limit for the filing of the Memorial; the time-limit for the filing of the Counter-Memorial was extended, by the same Order, to 3 November 2003.

By a letter dated 20 June 2003 and received in the Registry on the same day, the Agent of Mexico informed the Court that Mexico was unable for technical reasons to file the original of its Memorial on time and accordingly asked the Court to decide, under Article 44, paragraph 3, of the Rules of Court, that the filing of the Memorial after the expiration of the time-limit fixed therefor would be considered as valid; that letter was accompanied by two electronic copies of the Memorial and its annexes. Mexico having filed the original of the Memorial on 23 June 2003 and the United States having informed the Court, by a letter of 24 June 2003, that it had no comment to make on the matter, the Court decided on 25 June 2003 that the filing would be considered as valid.

7. In a letter of 14 October 2003, the Agent of Mexico expressed his Government's wish to amend its submissions in order to include therein the cases of two Mexican nationals, Mr. Víctor Miranda Guerrero and Mr. Tonatihu Aguilar Saucedo, who had been sentenced to death, after the filing of Mexico's Memorial, as a result of criminal proceedings in which, according to Mexico, the United States had failed to comply with its obligations under Article 36 of the Vienna Convention.

In a letter of 2 November 2003, under cover of which the United States filed its Counter-Memorial within the time-limit prescribed, the Agent of the United States informed the Court that his Government objected to the amendment of Mexico's submissions, on the grounds that the request was late, that Mexico had submitted no evidence concerning the alleged facts and that there was not enough time for the United States to investigate them.

In a letter received in the Registry on 28 November 2003, Mexico responded to the United States objection and at the same time amended its submissions so as to withdraw its request for relief in the cases of two Mexican nationals mentioned in the Memorial, Mr. Enrique Zambrano Garibi and Mr. Pedro Hernández Alberto, having come to the conclusion that the former had dual Mexican and United States nationality and that the latter had been informed of his right of consular notification prior to interrogation.

On 9 December 2003, the Registrar informed Mexico and the United States that, in order to ensure the procedural equality of the Parties, the Court had decided not to authorize the amendment of Mexico's submissions so as to include the two additional Mexican nationals mentioned above. He also informed the Parties that the Court had taken note that the United States had made no objection to the withdrawal by Mexico of its request for relief in the cases of Mr. Zambrano and Mr. Hernández.

8. On 28 November 2003 and 2 December 2003, Mexico filed various documents which it wished to produce in accordance with Article 56 of the Rules of Court. By letters dated 2 December 2003 and 5 December 2003, the Agent of the United States informed the Court that his Government did not object to the production of these new documents and that it intended to exercise its right to comment upon these documents and to submit documents in support of its comments, pursuant to paragraph 3 of that Article. By letters dated 9 December 2003, the Registrar informed the Parties that the Court had taken note that

the United States had no objection to the production of these documents and that accordingly counsel would be free to refer to them in the course of the hearings. On 10 December 2003, the Agent of the United States filed the comments of his Government on the new documents produced by Mexico, together with a number of documents in support of those comments.

9. Since the Court included upon the Bench no judge of Mexican nationality, Mexico availed itself of its right under Article 31, paragraph 2, of the Statute to choose a judge *ad hoc* to sit in the case: it chose Mr. Bernardo Sepúlveda.

10. Pursuant to Article 53, paragraph 2, of its Rules, the Court, having consulted the Parties, decided that copies of the pleadings and documents annexed would be made accessible to the public on the opening of the oral proceedings.

11. Public sittings were held between 15 and 19 December 2003, at which the Court heard the oral arguments and replies of:

For Mexico: H.E. Mr. Juan Manuel Gómez-Robledo,
Ms Sandra L. Babcock,
Mr. Víctor Manuel Uribe Aviña,
Mr. Donald Francis Donovan,
Ms Katherine Birmingham Wilmore,
H.E. Mr. Santiago Oñate,
Ms Socorro Flores Liera,
Mr. Carlos Bernal,
Mr. Dietmar W. Prager,
Mr. Pierre-Marie Dupuy.

For the United States: The Honourable William H. Taft, IV,
Ms Elisabeth Zoller,
Mr. Patrick F. Philbin,
Mr. John Byron Sandage,
Ms Catherine W. Brown,
Mr. D. Stephen Mathias,
Mr. James H. Thessin,
Mr. Thomas Weigend.

*

12. In its Application, Mexico formulated the decision requested in the following terms:

“The Government of the United Mexican States therefore asks the Court to adjudge and declare:

- (1) that the United States, in arresting, detaining, trying, convicting, and sentencing the 54 Mexican nationals on death row described in this Application, violated its international legal obligations to Mexico, in its own right and in the exercise of its right of consular protection of its nationals, as provided by Articles 5 and 36, respectively of the Vienna Convention;
- (2) that Mexico is therefore entitled to *restitutio in integrum*;
- (3) that the United States is under an international legal obligation not to

apply the doctrine of procedural default, or any other doctrine of its municipal law, to preclude the exercise of the rights afforded by Article 36 of the Vienna Convention;

(4) that the United States is under an international legal obligation to carry out in conformity with the foregoing international legal obligations any future detention of or criminal proceedings against the 54 Mexican nationals on death row or any other Mexican national in its territory, whether by a constituent, legislative, executive, judicial or other power, whether that power holds a superior or a subordinate position in the organization of the United States, and whether that power's functions are international or internal in character;

(5) that the right to consular notification under the Vienna Convention is a human right;

and that, pursuant to the foregoing international legal obligations,

(1) the United States must restore the *status quo ante*, that is, re-establish the situation that existed before the detention of, proceedings against, and convictions and sentences of, Mexico's nationals in violation of the United States international legal obligations;

(2) the United States must take the steps necessary and sufficient to ensure that the provisions of its municipal law enable full effect to be given to the purposes for which the rights afforded by Article 36 are intended;

(3) the United States must take the steps necessary and sufficient to establish a meaningful remedy at law for violations of the rights afforded to Mexico and its nationals by Article 36 of the Vienna Convention, including by barring the imposition, as a matter of municipal law, of any procedural penalty for the failure timely to raise a claim or defence based on the Vienna Convention where competent authorities of the United States have breached their obligation to advise the national of his or her rights under the Convention; and

(4) the United States, in light of the pattern and practice of violations set forth in this Application, must provide Mexico a full guarantee of the non-repetition of the illegal acts."

13. In the course of the written proceedings, the following submissions were presented by the Parties:

On behalf of the Government of Mexico,
in the Memorial:

"For these reasons, . . . the Government of Mexico respectfully requests the Court to adjudge and declare

(1) that the United States, in arresting, detaining, trying, convicting, and sentencing the fifty-four Mexican nationals on death row described in

Mexico's Application and this Memorial, violated its international legal obligations to Mexico, in its own right and in the exercise of its right of diplomatic protection of its nationals, as provided by Article 36 of the Vienna Convention;

- (2) that the obligation in Article 36 (1) of the Vienna Convention requires notification before the competent authorities of the receiving State interrogate the foreign national or take any other action potentially detrimental to his or her rights;
- (3) that the United States, in applying the doctrine of procedural default, or any other doctrine of its municipal law, to preclude the exercise and review of the rights afforded by Article 36 of the Vienna Convention, violated its international legal obligations to Mexico, in its own right and in the exercise of its right of diplomatic protection of its nationals, as provided by Article 36 of the Vienna Convention; and
- (4) that the United States is under an international legal obligation to carry out in conformity with the foregoing international legal obligations any future detention of or criminal proceedings against the fifty-four Mexican nationals on death row and any other Mexican national in its territory, whether by a constituent, legislative, executive, judicial or other power, whether that power holds a superior or a subordinate position in the organization of the United States, and whether that power's functions are international or internal in character;

and that, pursuant to the foregoing international legal obligations,

- (1) Mexico is entitled to *restitutio in integrum* and the United States therefore is under an obligation to restore the *status quo ante*, that is, re-establish the situation that existed at the time of the detention and prior to the interrogation of, proceedings against, and convictions and sentences of, Mexico's nationals in violation of the United States' international legal obligations, specifically by, among other things,
 - (a) vacating the convictions of the fifty-four Mexican nationals;
 - (b) vacating the sentences of the fifty-four Mexican nationals;
 - (c) excluding any subsequent proceedings against the fifty-four Mexican nationals any statements and confessions obtained from them prior to notification of their rights to consular notification and access;
 - (d) preventing the application of any procedural penalty for a Mexican national's failure timely to raise a claim or defence based on the Vienna Convention where competent authorities of the United States have breached their obligation to advise the national of his rights under the Convention;

- (e) preventing the application of any municipal law doctrine or judicial holding that prevents a court in the United States from providing a remedy, including the relief to which this Court holds that Mexico is entitled here, to a Mexican national whose Article 36 rights have been violated; and
 - (f) preventing the application of any municipal law doctrine or judicial holding that requires an individualized showing of prejudice as a prerequisite to relief for the violations of Article 36;
- (2) the United States, in light of the regular and continuous violations set forth in Mexico's Application and Memorial, is under an obligation to take all legislative, executive, and judicial steps necessary to:
- (a) ensure that the regular and continuing violations of the Article 36 consular notification, access, and assistance rights of Mexico and its nationals cease;
 - (b) guarantee that its competent authorities, of federal, state, and local jurisdiction, maintain regular and routine compliance with their Article 36 obligations;
 - (c) ensure that its judicial authorities cease applying, and guarantee that in the future they will not apply:
 - (i) any procedural penalty for a Mexican national's failure timely to raise a claim or defence based on the Vienna Convention where competent authorities of the United States have breached their obligation to advise the national of his or her rights under the Convention;
 - (ii) any municipal law doctrine or judicial holding that prevents a court in the United States from providing a remedy, including the relief to which this Court holds that Mexico is entitled here, to a Mexican national whose Article 36 rights have been violated; and
 - (iii) any municipal law doctrine or judicial holding that requires an individualized showing of prejudice as a prerequisite to relief for the Vienna Convention violations shown here."

On behalf of the Government of the United States,

in the Counter-Memorial:

"On the basis of the facts and arguments set out above, the Government of the United States of America requests that the Court adjudge and declare that the claims of the United Mexican States are dismissed."

14. At the oral proceedings, the following submissions were presented by the Parties:

On behalf of the Government of Mexico,

“The Government of Mexico respectfully requests the Court to adjudge and declare

- (1) that the United States of America, in arresting, detaining, trying, convicting, and sentencing the 52 Mexican nationals on death row described in Mexico’s Memorial, violated its international legal obligations to Mexico, in its own right and in the exercise of its right to diplomatic protection of its nationals, by failing to inform, without delay, the 52 Mexican nationals after their arrest of their right to consular notification and access under Article 36 (1) (b) of the Vienna Convention on Consular Relations, and by depriving Mexico of its right to provide consular protection and the 52 nationals’ right to receive such protection as Mexico would provide under Article 36 (1) (a) and (c) of the Convention;
- (2) that the obligation in Article 36 (1) of the Vienna Convention requires notification of consular rights and a reasonable opportunity for consular access before the competent authorities of the receiving State take any action potentially detrimental to the foreign national’s rights;
- (3) that the United States of America violated its obligations under Article 36 (2) of the Vienna Convention by failing to provide meaningful and effective review and reconsideration of convictions and sentences impaired by a violation of Article 36 (1); by substituting for such review and reconsideration clemency proceedings; and by applying the ‘procedural default’ doctrine and other municipal law doctrines that fail to attach legal significance to an Article 36 (1) violation on its own terms;
- (4) that pursuant to the injuries suffered by Mexico in its own right and in the exercise of diplomatic protection of its nationals, Mexico is entitled to full reparation for those injuries in the form of *restitutio in integrum*;
- (5) that this restitution consists of the obligation to restore the *status quo ante* by annulling or otherwise depriving of full force or effect the convictions and sentences of all 52 Mexican nationals;
- (6) that this restitution also includes the obligation to take all measures necessary to ensure that a prior violation of Article 36 shall not affect the subsequent proceedings;
- (7) that to the extent that any of the 52 convictions or sentences are not annulled, the United States shall provide, by means of its own choosing, meaningful and effective review and reconsideration of the convictions and sentences of the 52 nationals, and that this obligation cannot be satisfied by means of clemency proceedings or if any municipal law rule or doctrine inconsistent with paragraph (3) above is applied; and

- (8) that the United States of America shall cease its violations of Article 36 of the Vienna Convention with regard to Mexico and its 52 nationals and shall provide appropriate guarantees and assurances that it shall take measures sufficient to achieve increased compliance with Article 36 (1) and to ensure compliance with Article 36 (2).”

On behalf of the Government of the United States,

“On the basis of the facts and arguments made by the United States in its Counter-Memorial and in these proceedings, the Government of the United States of America requests that the Court, taking into account that the United States has conformed its conduct to this Court’s Judgment in the *LaGrand Case (Germany v. United States of America)*, not only with respect to German nationals but, consistent with the Declaration of the President of the Court in that case, to all detained foreign nationals, adjudge and declare that the claims of the United Mexican States are dismissed.”

* * *

15. The present proceedings have been brought by Mexico against the United States on the basis of the Vienna Convention, and of the Optional Protocol providing for the jurisdiction of the Court over “disputes arising out of the interpretation or application” of the Convention. Mexico and the United States are, and were at all relevant times, parties to the Vienna Convention and to the Optional Protocol. Mexico claims that the United States has committed breaches of the Vienna Convention in relation to the treatment of a number of Mexican nationals who have been tried, convicted and sentenced to death in criminal proceedings in the United States. The original claim related to 54 such persons, but as a result of subsequent adjustments to its claim made by Mexico (see paragraph 7 above), only 52 individual cases are involved. These criminal proceedings have been taking place in nine different States of the United States, namely California (28 cases), Texas (15 cases), Illinois (three cases), Arizona (one case), Arkansas (one case), Nevada (one case), Ohio (one case), Oklahoma (one case) and Oregon (one case), between 1979 and the present.

16. For convenience, the names of the 52 individuals, and the numbers by which their cases will be referred to, are set out below:

1. Carlos Avena Guillen
2. Héctor Juan Ayala
3. Vicente Benavides Figueroa
4. Constantino Carrera Montenegro
5. Jorge Contreras López

6. Daniel Covarrubias Sánchez
7. Marcos Esquivel Barrera
8. Rubén Gómez Pérez
9. Jaime Armando Hoyos
10. Arturo Juárez Suárez
11. Juan Manuel López
12. José Lupercio Casares
13. Luis Alberto Maciel Hernández
14. Abelino Manriquez Jáquez
15. Omar Fuentes Martínez (a.k.a. Luis Aviles de la Cruz)
16. Miguel Angel Martínez Sánchez
17. Martín Mendoza García
18. Sergio Ochoa Tamayo
19. Enrique Parra Dueñas
20. Juan de Dios Ramírez Villa
21. Magdaleno Salazar
22. Ramón Salcido Bojórquez
23. Juan Ramón Sánchez Ramírez
24. Ignacio Tafoya Arriola
25. Alfredo Valdez Reyes
26. Eduardo David Vargas
27. Tomás Verano Cruz
28. [Case withdrawn]
29. Samuel Zamudio Jiménez
30. Juan Carlos Alvarez Banda
31. César Roberto Fierro Reyna
32. Héctor García Torres
33. Ignacio Gómez
34. Ramiro Hernández Llanas
35. Ramiro Rubí Ibarra
36. Humberto Leal García
37. Virgilio Maldonado
38. José Ernesto Medellín Rojas
39. Roberto Moreno Ramos
40. Daniel Angel Plata Estrada
41. Rubén Ramírez Cárdenas
42. Félix Rocha Díaz
43. Oswaldo Regalado Soriano
44. Edgar Arias Tamayo
45. Juan Caballero Hernández
46. Mario Flores Urbán
47. Gabriel Solache Romero
48. Martín Raúl Fong Soto
49. Rafael Camargo Ojeda
50. [Case withdrawn]
51. Carlos René Pérez Gutiérrez
52. José Trinidad Loza

53. Osvaldo Netzahualcóyotl Torres Aguilera
54. Horacio Alberto Reyes Camarena

17. The provisions of the Vienna Convention of which Mexico alleges violations are contained in Article 36. Paragraphs 1 and 2 of this Article are set out respectively in paragraphs 50 and 108 below. Article 36 relates, according to its title, to "Communication and contact with nationals of the sending State". Paragraph 1 (*b*) of that Article provides that if a national of that State "is arrested or committed to prison or to custody pending trial or is detained in any other manner", and he so requests, the local consular post of the sending State is to be notified. The Article goes on to provide that the "competent authorities of the receiving State" shall "inform the person concerned without delay of his rights" in this respect. Mexico claims that in the present case these provisions were not complied with by the United States authorities in respect of the 52 Mexican nationals the subject of its claims. As a result, the United States has according to Mexico committed breaches of paragraph 1 (*b*); moreover, Mexico claims, for reasons to be explained below (see paragraphs 98 *et seq.*), that the United States is also in breach of paragraph 1 (*a*) and (*c*) and of paragraph 2 of Article 36, in view of the relationship of these provisions with paragraph 1 (*b*).

18. As regards the terminology employed to designate the obligations incumbent upon the receiving State under Article 36, paragraph 1 (*b*), the Court notes that the Parties have used the terms "inform" and "notify" in differing senses. For the sake of clarity, the Court, when speaking in its own name in the present Judgment, will use the word "inform" when referring to an individual being made aware of his rights under that subparagraph and the word "notify" when referring to the giving of notice to the consular post.

19. The underlying facts alleged by Mexico may be briefly described as follows: some are conceded by the United States, and some disputed. Mexico states that all the individuals the subject of its claims were Mexican nationals at the time of their arrest. It further contends that the United States authorities that arrested and interrogated these individuals had sufficient information at their disposal to be aware of the foreign nationality of those individuals. According to Mexico's account, in 50 of the specified cases, Mexican nationals were never informed by the competent United States authorities of their rights under Article 36, paragraph 1 (*b*), of the Vienna Convention and, in the two remaining cases, such information was not provided "without delay", as required by that provision. Mexico has indicated that in 29 of the 52 cases its consular authorities learned of the detention of the Mexican nationals only after death sentences had been handed down. In the 23 remaining cases, Mexico contends that it learned of the cases through means other than notification to the consular post by the competent United States authorities under Article 36, paragraph 1 (*b*). It explains that in five cases this

was too late to affect the trials, that in 15 cases the defendants had already made incriminating statements, and that it became aware of the other three cases only after considerable delay.

20. Of the 52 cases referred to in Mexico's final submissions, 49 are currently at different stages of the proceedings before United States judicial authorities at state or federal level, and in three cases, those of Mr. Fierro (case No. 31), Mr. Moreno (case No. 39) and Mr. Torres (case No. 53), judicial remedies within the United States have already been exhausted. The Court has been informed of the variety of types of proceedings and forms of relief available in the criminal justice systems of the United States, which can differ from state to state. In very general terms, and according to the description offered by both Parties in their pleadings, it appears that the 52 cases may be classified into three categories: 24 cases which are currently in direct appeal; 25 cases in which means of direct appeal have been exhausted, but post-conviction relief (*habeas corpus*), either at state or at federal level, is still available; and three cases in which no judicial remedies remain. The Court also notes that, in at least 33 cases, the alleged breach of the Vienna Convention was raised by the defendant either during pre-trial, at trial, on appeal or in *habeas corpus* proceedings, and that some of these claims were dismissed on procedural or substantive grounds and others are still pending. To date, in none of the 52 cases have the defendants had recourse to the clemency process.

21. On 9 January 2003, the day on which Mexico filed its Application and a request for the indication of provisional measures, all 52 individuals the subject of the claims were on death row. However, two days later the Governor of the State of Illinois, exercising his power of clemency review, commuted the sentences of all convicted individuals awaiting execution in that State, including those of three individuals named in Mexico's Application (Mr. Caballero (case No. 45), Mr. Flores (case No. 46) and Mr. Solache (case No. 47)). By a letter dated 20 January 2003, Mexico informed the Court that, further to that decision, it withdrew its request for the indication of provisional measures on behalf of these three individuals, but that its Application remained unchanged. In the Order of 5 February 2003, mentioned in paragraph 3 above, on the request by Mexico for the indication of provisional measures, the Court considered that it was apparent from the information before it that the three Mexican nationals named in the Application who had exhausted all judicial remedies in the United States (see paragraph 20 above) were at risk of execution in the following months, or even weeks. Consequently, it ordered by way of provisional measure that the United States take all measures necessary to ensure that these individuals would not be executed

pending final judgment in these proceedings. The Court notes that, at the date of the present Judgment, these three individuals have not been executed, but further notes with great concern that, by an Order dated 1 March 2004, the Oklahoma Court of Criminal Appeals has set an execution date of 18 May 2004 for Mr. Torres.

* * *

THE MEXICAN OBJECTION TO THE UNITED STATES OBJECTIONS TO
JURISDICTION AND ADMISSIBILITY

22. As noted above, the present dispute has been brought before the Court by Mexico on the basis of the Vienna Convention and the Optional Protocol to that Convention. Article I of the Optional Protocol provides:

“Disputes arising out of the interpretation or application of the [Vienna] Convention shall lie within the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice and may accordingly be brought before the Court by a written application made by any party to the dispute being a Party to the present Protocol.”

23. The United States has presented a number of objections to the jurisdiction of the Court, as well as a number of objections to the admissibility of the claims advanced by Mexico. It is however the contention of Mexico that all the objections raised by the United States are inadmissible as having been raised after the expiration of the time-limit laid down by the Rules of Court. Mexico draws attention to the text of Article 79, paragraph 1, of the Rules of Court as amended in 2000, which provides that

“Any objection by the respondent to the jurisdiction of the Court or to the admissibility of the application, or other objection the decision upon which is requested before any further proceedings on the merits, shall be made in writing as soon as possible, and not later than three months after the delivery of the Memorial.”

The previous text of this paragraph required objections to be made “within the time-limit fixed for delivery of the Counter-Memorial”. In the present case the Memorial of Mexico was filed on 23 June 2003; the objections of the United States to jurisdiction and admissibility were presented in its Counter-Memorial, filed on 3 November 2003, more than four months later.

24. The United States has observed that, during the proceedings on the request made by Mexico for the indication of provisional measures in this case, it specifically reserved its right to make jurisdictional arguments at the appropriate stage, and that subsequently the Parties agreed that there should be a single round of pleadings. The Court would however emphasize that parties to cases before it cannot, by purporting to “reserve their rights” to take some procedural action, exempt themselves from the application to such action of the provisions of the Statute and Rules of

Court (cf. *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Yugoslavia)*, Order of 13 September 1993, *I.C.J. Reports 1993*, p. 338, para. 28).

The Court notes, however, that Article 79 of the Rules applies only to preliminary objections, as is indicated by the title of the subsection of the Rules which it constitutes. As the Court observed in the *Lockerbie* cases, "if it is to be covered by Article 79, an objection must . . . possess a 'preliminary' character", and "Paragraph 1 of Article 79 of the Rules of Court characterizes as 'preliminary' an objection 'the decision upon which is requested before any further proceedings'" (*Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention arising from the Aerial Incident at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. United Kingdom) (Libyan Arab Jamahiriya v. United States of America)*, *Preliminary Objections*, *I.C.J. Reports 1998*, p. 26, para. 47; p. 131, para. 46); and the effect of the timely presentation of such an objection is that the proceedings on the merits are suspended (paragraph 5 of Article 79). An objection that is not presented as a preliminary objection in accordance with paragraph 1 of Article 79 does not thereby become inadmissible. There are of course circumstances in which the party failing to put forward an objection to jurisdiction might be held to have acquiesced in jurisdiction (*Appeal Relating to the Jurisdiction of the ICAO Council, Judgment*, *I.C.J. Reports 1972*, p. 52, para. 13). However, apart from such circumstances, a party failing to avail itself of the Article 79 procedure may forfeit the right to bring about a suspension of the proceedings on the merits, but can still argue the objection along with the merits. That is indeed what the United States has done in this case; and, for reasons to be indicated below, many of its objections are of such a nature that they would in any event probably have had to be heard along with the merits. The Court concludes that it should not exclude from consideration the objections of the United States to jurisdiction and admissibility by reason of the fact that they were not presented within three months from the date of filing of the Memorial.

25. The United States has submitted four objections to the jurisdiction of the Court, and five to the admissibility of the claims of Mexico. As noted above, these have not been submitted as preliminary objections under Article 79 of the Rules of Court; and they are not of such a nature that the Court would be required to examine and dispose of all of them *in limine*, before dealing with any aspect of the merits of the case. Some are expressed to be only addressed to certain claims; some are addressed to questions of the remedies to be indicated if the Court finds that breaches of the Vienna Convention have been committed; and some are of such a nature that they would have to be dealt with along with the merits. The Court will however now examine each of them in turn.

* *

UNITED STATES OBJECTIONS TO JURISDICTION

26. The United States contends that the Court lacks jurisdiction to decide many of Mexico's claims, inasmuch as Mexico's submissions in the Memorial asked the Court to decide questions which do not arise out of the interpretation or application of the Vienna Convention, and which the United States has never agreed to submit to the Court.

*

27. By its first jurisdictional objection, the United States suggested that the Memorial is fundamentally addressed to the treatment of Mexican nationals in the federal and state criminal justice systems of the United States, and the operation of the United States criminal justice system as a whole. It suggested that Mexico's invitation to the Court to make what the United States regards as "far-reaching and unsustainable findings concerning the United States criminal justice systems" would be an abuse of the Court's jurisdiction. At the hearings, the United States contended that Mexico is asking the Court to interpret and apply the treaty as if it were intended principally to govern the operation of a State's criminal justice system as it affects foreign nationals.

28. The Court would recall that its jurisdiction in the present case has been invoked under the Vienna Convention and Optional Protocol to determine the nature and extent of the obligations undertaken by the United States towards Mexico by becoming party to that Convention. If and so far as the Court may find that the obligations accepted by the parties to the Vienna Convention included commitments as to the conduct of their municipal courts in relation to the nationals of other parties, then in order to ascertain whether there have been breaches of the Convention, the Court must be able to examine the actions of those courts in the light of international law. The Court is unable to uphold the contention of the United States that, as a matter of jurisdiction, it is debarred from enquiring into the conduct of criminal proceedings in United States courts. How far it may do so in the present case is a matter for the merits. The first objection of the United States to jurisdiction cannot therefore be upheld.

*

29. The second jurisdictional objection presented by the United States was addressed to the first of the submissions presented by Mexico in its Memorial (see paragraph 13 above). The United States pointed out that Article 36 of the Vienna Convention "creates no obligations constraining the rights of the United States to arrest a foreign national"; and that

similarly the “detaining, trying, convicting and sentencing” of Mexican nationals could not constitute breaches of Article 36, which merely lays down obligations of notification. The United States deduced from this that the matters raised in Mexico’s first submission are outside the jurisdiction of the Court under the Vienna Convention and the Optional Protocol, and it maintains this objection in response to the revised submission, presented by Mexico at the hearings, whereby it asks the Court to adjudge and declare:

“That the United States of America, in arresting, detaining, trying, convicting, and sentencing the 52 Mexican nationals on death row described in Mexico’s Memorial, violated its international legal obligations to Mexico, in its own right and in the exercise of its right to diplomatic protection of its nationals, by failing to inform, without delay, the 52 Mexican nationals after their arrest of their right to consular notification and access under Article 36 (1) (b) of the Vienna Convention on Consular Relations, and by depriving Mexico of its right to provide consular protection and the 52 nationals’ right to receive such protection as Mexico would provide under Article 36 (1) (a) and (c) of the Convention.”

30. This issue is a question of interpretation of the obligations imposed by the Vienna Convention. It is true that the only obligation of the receiving State toward a foreign national that is specifically enunciated by Article 36, paragraph 1 (b), of the Vienna Convention is to inform such foreign national of his rights, when he is “arrested or committed to prison or to custody pending trial or is detained in any other manner”; the text does not restrain the receiving State from “arresting, detaining, trying, convicting, and sentencing” the foreign national, or limit its power to do so. However, as regards the detention, trial, conviction and sentence of its nationals, Mexico argues that depriving a foreign national facing criminal proceedings of consular notification and assistance renders those proceedings fundamentally unfair. Mexico explains in this respect that:

“Consular notification constitutes a basic component of due process by ensuring both the procedural equality of a foreign national in the criminal process and the enforcement of other fundamental due process guarantees to which that national is entitled”,

and that "It is therefore an essential requirement for fair criminal proceedings against foreign nationals." In Mexico's contention, "consular notification has been widely recognized as a fundamental due process right, and indeed, a human right". On this basis it argues that the rights of the detained Mexican nationals have been violated by the authorities of the United States, and that those nationals have been "subjected to criminal proceedings without the fairness and dignity to which each person is entitled". Consequently, in the contention of Mexico, "the integrity of these proceedings has been hopelessly undermined, their outcomes rendered irrevocably unjust". For Mexico to contend, on this basis, that not merely the failure to notify, but the arrest, detention, trial and conviction of its nationals were unlawful is to argue in favour of a particular interpretation of the Vienna Convention. Such an interpretation may or may not be confirmed on the merits, but is not excluded from the jurisdiction conferred on the Court by the Optional Protocol to the Vienna Convention. The second objection of the United States to jurisdiction cannot therefore be upheld.

*

31. The third objection by the United States to the jurisdiction of the Court refers to the first of the submissions in the Mexican Memorial concerning remedies. By that submission, which was confirmed in substance in the final submissions, Mexico claimed that

"Mexico is entitled to *restitutio in integrum*, and the United States therefore is under an obligation to restore the *status quo ante*, that is, re-establish the situation that existed at the time of the detention and prior to the interrogation of, proceedings against, and convictions and sentences of, Mexico's nationals in violation of the United States' international legal obligations . . ."

On that basis, Mexico went on in its first submission to invite the Court to declare that the United States was bound to vacate the convictions and sentences of the Mexican nationals concerned, to exclude from any subsequent proceedings any statements and confessions obtained from them, to prevent the application of any procedural penalty for failure to raise a timely defence on the basis of the Convention, and to prevent the application of any municipal law rule preventing courts in the United States from providing a remedy for the violation of Article 36 rights.

32. The United States objects that so to require specific acts by the United States in its municipal criminal justice systems would intrude deeply into the independence of its courts; and that for the Court to

declare that the United States is under a specific obligation to vacate convictions and sentences would be beyond its jurisdiction. The Court, the United States claims, has no jurisdiction to review appropriateness of sentences in criminal cases, and even less to determine guilt or innocence, matters which only a court of criminal appeal could go into.

33. For its part, Mexico points out that the United States accepts that the Court has jurisdiction to interpret the Vienna Convention and to determine the appropriate form of reparation under international law. In Mexico's view, these two considerations are sufficient to defeat the third objection to jurisdiction of the United States.

34. For the same reason as in respect of the second jurisdictional objection, the Court is unable to uphold the contention of the United States that, even if the Court were to find that breaches of the Vienna Convention have been committed by the United States of the kind alleged by Mexico, it would still be without jurisdiction to order *restitutio in integrum* as requested by Mexico. The Court would recall in this regard, as it did in the *LaGrand* case, that, where jurisdiction exists over a dispute on a particular matter, no separate basis for jurisdiction is required by the Court in order to consider the remedies a party has requested for the breach of the obligation (*I.C.J. Reports 2001*, p. 485, para. 48). Whether or how far the Court may order the remedy requested by Mexico are matters to be determined as part of the merits of the dispute. The third objection of the United States to jurisdiction cannot therefore be upheld.

*

35. The fourth and last jurisdictional objection of the United States is that "the Court lacks jurisdiction to determine whether or not consular notification is a 'human right', or to declare fundamental requirements of substantive or procedural due process". As noted above, it is on the basis of Mexico's contention that the right to consular notification has been widely recognized as a fundamental due process right, and indeed a human right, that it argues that the rights of the detained Mexican nationals have been violated by the authorities of the United States, and that they have been "subjected to criminal proceedings without the fairness and dignity to which each person is entitled". The Court observes that Mexico has presented this argument as being a matter of interpretation of Article 36, paragraph 1 (*b*), and therefore belonging to the merits. The Court considers that this is indeed a question of interpretation of the Vienna Convention, for which it has jurisdiction; the fourth objection of the United States to jurisdiction cannot therefore be upheld.

* *

--UNITED STATES OBJECTIONS TO ADMISSIBILITY

36. In its Counter-Memorial, the United States has advanced a number of arguments presented as objections to the admissibility of Mexico's claims. It argues that

“Before proceeding, the Court should weigh whether characteristics of the case before it today, or special circumstances related to particular claims, render either the entire case, or particular claims, inappropriate for further consideration and decision by the Court.”

*

37. The first objection under this head is that “Mexico’s submissions should be found inadmissible because they seek to have this Court function as a court of criminal appeal”; there is, in the view of the United States, “no other apt characterization of Mexico’s two submissions in respect of remedies”. The Court notes that this contention is addressed solely to the question of remedies. The United States does not contend on this ground that the Court should decline jurisdiction to enquire into the question of breaches of the Vienna Convention at all, but simply that, if such breaches are shown, the Court should do no more than decide that the United States must provide “review and reconsideration” along the lines indicated in the Judgment in the *LaGrand* case (*I.C.J. Reports 2001*, pp. 513-514, para. 125). The Court notes that this is a matter of merits. The first objection of the United States to admissibility cannot therefore be upheld.

*

38. The Court now turns to the objection of the United States based on the rule of exhaustion of local remedies. The United States contends that the Court “should find inadmissible Mexico’s claim to exercise its right of diplomatic protection on behalf of any Mexican national who has failed to meet the customary legal requirement of exhaustion of municipal remedies”. It asserts that in a number of the cases the subject of Mexico’s claims, the detained Mexican national, even with the benefit of the provision of Mexican consular assistance, failed to raise the alleged non-compliance with Article 36, paragraph 1, of the Vienna Convention at the trial. Furthermore, it contends that all of the claims relating to cases referred to in the Mexican Memorial are inadmissible because local remedies remain available in every case. It has drawn attention to the fact that litigation is pending before courts in the United States in a large number of the cases the subject of Mexico’s claims and that, in those cases where judicial remedies have been exhausted, the defendants have not had recourse to the clemency process available to them; from this it concludes that none

of the cases "is in an appropriate posture for review by an international tribunal".

39. Mexico responds that the rule of exhaustion of local remedies cannot preclude the admissibility of its claims. It first states that a majority of the Mexican nationals referred to in paragraph 16 above have sought judicial remedies in the United States based on the Vienna Convention and that their claims have been barred, notably on the basis of the procedural default doctrine. In this regard, it quotes the Court's statement in the *LaGrand* case that

"the United States may not . . . rely before this Court on this fact in order to preclude the admissibility of Germany's [claim] . . . , as it was the United States itself which had failed to carry out its obligation under the Convention to inform the *LaGrand* brothers" (*I.C.J. Reports 2001*, p. 488, para. 60).

Further, in respect of the other Mexican nationals, Mexico asserts that

"the courts of the United States have never granted a judicial remedy to any foreign national for a violation of Article 36. The United States courts hold either that Article 36 does not create an individual right, or that a foreign national who has been denied his Article 36 rights but given his constitutional and statutory rights, cannot establish prejudice and therefore cannot get relief."

It concludes that the available judicial remedies are thus ineffective. As for clemency procedures, Mexico contends that they cannot count for purposes of the rule of exhaustion of local remedies, because they are not a judicial remedy.

40. In its final submissions Mexico asks the Court to adjudge and declare that the United States, in failing to comply with Article 36, paragraph 1, of the Vienna Convention, has "violated its international legal obligations to Mexico, in its own right and in the exercise of its right of diplomatic protection of its nationals".

The Court would first observe that the individual rights of Mexican nationals under paragraph 1 (*b*) of Article 36 of the Vienna Convention are rights which are to be asserted, at any rate in the first place, within the domestic legal system of the United States. Only when that process is completed and local remedies are exhausted would Mexico be entitled to espouse the individual claims of its nationals through the procedure of diplomatic protection.

In the present case Mexico does not, however, claim to be acting solely on that basis. It also asserts its own claims, basing them on the injury which it contends that *it has itself suffered, directly and through its*

nationals, as a result of the violation by the United States of the obligations incumbent upon it under Article 36, paragraph 1 (a), (b) and (c).

The Court would recall that, in the *LaGrand* case, it recognized that

“Article 36, paragraph 1 [of the Vienna Convention], creates individual rights [for the national concerned], which . . . may be invoked in this Court by the national State of the detained person” (*I.C.J. Reports 2001*, p. 494, para. 77).

It would further observe that violations of the rights of the individual under Article 36 may entail a violation of the rights of the sending State, and that violations of the rights of the latter may entail a violation of the rights of the individual. In these special circumstances of interdependence of the rights of the State and of individual rights, Mexico may, in submitting a claim in its own name, request the Court to rule on the violation of rights which it claims to have suffered both directly and through the violation of individual rights conferred on Mexican nationals under Article 36, paragraph 1 (b). The duty to exhaust local remedies does not apply to such a request. Further, for reasons just explained, the Court does not find it necessary to deal with Mexico's claims of violation under a distinct heading of diplomatic protection. Without needing to pronounce at this juncture on the issues raised by the procedural default rule, as explained by Mexico in paragraph 39 above, the Court accordingly finds that the second objection by the United States to admissibility cannot be upheld.

*

41. The Court now turns to the question of the alleged dual nationality of certain of the Mexican nationals the subject of Mexico's claims. This question is raised by the United States by way of an objection to the admissibility of those claims: the United States contends that in its Memorial Mexico had failed to establish that it may exercise diplomatic protection based on breaches of Mexico's rights under the Vienna Convention with respect to those of its nationals who are also nationals of the United States. The United States regards it as an accepted principle that, when a person arrested or detained in the receiving State is a national of that State, then even if he is also a national of another State party to the Vienna Convention, Article 36 has no application, and the authorities of the receiving State are not required to proceed as laid down in that Article; and Mexico has indicated that, for the purposes of the present case it does not contest that dual nationals have no right to be advised of their rights under Article 36.

42. It has however to be recalled that Mexico, in addition to seeking to exercise diplomatic protection of its nationals, is making a claim in its

own right on the basis of the alleged breaches by the United States of Article 36 of the Vienna Convention. Seen from this standpoint, the question of dual nationality is not one of admissibility, but of merits. A claim may be made by Mexico of breach of Article 36 of the Vienna Convention in relation to any of its nationals, and the United States is thereupon free to show that, because the person concerned was also a United States national, Article 36 had no application to that person, so that no breach of treaty obligations could have occurred. Furthermore, as regards the claim to exercise diplomatic protection, the question whether Mexico is entitled to protect a person having dual Mexican and United States nationality is subordinated to the question whether, in relation to such a person, the United States was under any obligation in terms of Article 36 of the Vienna Convention. It is thus in the course of its examination of the merits that the Court will have to consider whether the individuals concerned, or some of them, were dual nationals in law. Without prejudice to the outcome of such examination, the third objection of the United States to admissibility cannot therefore be upheld.

*

43. The Court now turns to the fourth objection advanced by the United States to the admissibility of Mexico's claims: the contention that

"The Court should not permit Mexico to pursue a claim against the United States with respect to any individual case where Mexico had actual knowledge of a breach of the [Vienna Convention] but failed to bring such breach to the attention of the United States or did so only after considerable delay."

In the Counter-Memorial, the United States advances two considerations in support of this contention: that if the cases had been mentioned promptly, corrective action might have been possible; and that by inaction Mexico created an impression that it considered that the United States was meeting its obligations under the Convention, as Mexico understood them. At the hearings, the United States suggested that Mexico had in effect waived its right to claim in respect of the alleged breaches of the Convention, and to seek reparation.

44. As the Court observed in the case of *Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia)*, "delay on the part of a claimant State may render an application inadmissible", but "international law does not lay down any specific time-limit in that regard" (*I.C.J. Reports 1992*, pp. 253-254, para. 32). In that case the Court recognized that delay might prejudice the respondent State "with regard to both the establishment of the facts and the determination of the content of the applicable law" (*ibid.*, p. 255, para. 36), but it has not been suggested that there is any such risk of prejudice in the present case. So far as inadmissibility might be based on an implied waiver of rights, the Court considers that only a much

more prolonged and consistent inaction on the part of Mexico than any that the United States has alleged might be interpreted as implying such a waiver. Furthermore, Mexico indicated a number of ways in which it brought to the attention of the United States the breaches which it perceived of the Vienna Convention. The fourth objection of the United States to admissibility cannot therefore be upheld.

*

45. The Court has now to examine the objection of the United States that the claim of Mexico is inadmissible in that Mexico should not be allowed to invoke against the United States standards that Mexico does not follow in its own practice. The United States contends that, in accordance with basic principles of administration of justice and the equality of States, both litigants are to be held accountable to the same rules of international law. The objection in this regard was presented in terms of the interpretation of Article 36 of the Vienna Convention, in the sense that, according to the United States, a treaty may not be interpreted so as to impose a significantly greater burden on any one party than the other (*Diversion of Water from the Meuse, Judgment, 1937, P.C.I.J., Series A/B, No. 70, p. 20*).

46. The Court would recall that the United States had already raised an objection of a similar nature before it in the *LaGrand* case; there, the Court held that it need not decide "whether this argument of the United States, if true, would result in the inadmissibility of Germany's submissions", since the United States had failed to prove that Germany's own practice did not conform to the standards it was demanding from the United States (*I.C.J. Reports 2001, p. 489, para. 63*).

47. The Court would recall that it is in any event essential to have in mind the nature of the Vienna Convention. It lays down certain standards to be observed by all States parties, with a view to the "unimpeded conduct of consular relations", which, as the Court observed in 1979, is important in present-day international law "in promoting the development of friendly relations among nations, and ensuring protection and assistance for aliens resident in the territories of other States" (*United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran), Provisional Measures, Order of 15 December 1979, I.C.J. Reports 1979, pp. 19-20, para. 40*). Even if it were shown, therefore, that Mexico's practice as regards the application of Article 36 was not beyond reproach, this would not constitute a ground of objection to the admissibility of Mexico's claim. The fifth objection of the United States to admissibility cannot therefore be upheld.

* * *

48. Having established that it has jurisdiction to entertain Mexico's claims and that they are admissible, the Court will now turn to the merits of those claims.

* *

ARTICLE 36, PARAGRAPH 1

49. In its final submissions Mexico asks the Court to adjudge and declare that,

“the United States of America, in arresting, detaining, trying, convicting, and sentencing the 52 Mexican nationals on death row described in Mexico's Memorial, violated its international legal obligations to Mexico, in its own right and in the exercise of its right to diplomatic protection of its nationals, by failing to inform, without delay, the 52 Mexican nationals after their arrest of their right to consular notification and access under Article 36 (1) (b) of the Vienna Convention on Consular Relations, and by depriving Mexico of its right to provide consular protection and the 52 nationals' right to receive such protection as Mexico would provide under Article 36 (1) (a) and (c) of the Convention”.

50. The Court has already in its Judgment in the *LaGrand* case described Article 36, paragraph 1, as “an interrelated régime designed to facilitate the implementation of the system of consular protection” (*I.C.J. Reports 2001*, p. 492, para. 74). It is thus convenient to set out the entirety of that paragraph.

“With a view toward facilitating the exercise of consular functions relating to nationals of the sending State:

- (a) consular officers shall be free to communicate with nationals of the sending State and to have access to them. Nationals of the sending State shall have the same freedom with respect to communication with and access to consular officers of the sending State;
- (b) if he so requests, the competent authorities of the receiving State shall, without delay, inform the consular post of the sending State if, within its consular district, a national of that State is arrested or committed to prison or to custody pending trial or is detained in any other manner. Any communication addressed to the consular post by the person arrested, in prison, custody or detention shall be forwarded by the said authorities

without delay. The said authorities shall inform the person concerned without delay of his rights under this subparagraph;

- (c) consular officers shall have the right to visit a national of the sending State who is in prison, custody or detention, to converse and correspond with him and to arrange for his legal representation. They shall also have the right to visit any national of the sending State who is in prison, custody or detention in their district in pursuance of a judgment. Nevertheless, consular officers shall refrain from taking action on behalf of a national who is in prison, custody or detention if he expressly opposes such action."

51. The United States as the receiving State does not deny its duty to perform these obligations. However, it claims that the obligations apply only to individuals shown to be of Mexican nationality alone, and not to those of dual Mexican/United States nationality. The United States further contends *inter alia* that it has not committed any breach of Article 36, paragraph 1 (b), upon the proper interpretation of "without delay" as used in that subparagraph.

52. Thus two major issues under Article 36, paragraph 1 (b), that are in dispute between the Parties are, first, the question of the nationality of the individuals concerned; and second, the question of the meaning to be given to the expression "without delay". The Court will examine each of these in turn.

53. The Parties have advanced their contentions as to nationality in three different legal contexts. The United States has begun by making an objection to admissibility, which the Court has already dealt with (see paragraphs 41 and 42 above). The United States has further contended that a substantial number of the 52 persons listed in paragraph 16 above were United States nationals and that it thus had no obligation to these individuals under Article 36, paragraph 1 (b). The Court will address this aspect of the matter in the following paragraphs. Finally, the Parties disagree as to whether the requirement under Article 36, paragraph 1 (b), for the information to be given "without delay" becomes operative upon arrest or upon ascertainment of nationality. The Court will address this issue later (see paragraph 63 below).

54. The Parties disagree as to what each of them must show as regards nationality in connection with the applicability of the terms of Article 36, paragraph 1, and as to how the principles of evidence have been met on the facts of the cases.

55. Both Parties recognize the well-settled principle in international law that a litigant seeking to establish the existence of a fact bears the burden of proving it (cf. *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, *Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1984*, p. 437, para. 101). Mexico acknowledges that it has the burden of proof to show that the 52 persons listed in paragraph 16 above were Mexican nationals to whom the provisions of Article 36, paragraph 1 (b), in principle apply. It claims it has met this burden by providing to the Court the birth certificates of these nationals, and declarations from 42 of them that they have not acquired United States nationality. Mexico further contends that the burden of proof lies on the United States should it wish to contend that particular arrested persons of Mexican nationality were, at the relevant time, also United States nationals.

56. The United States accepts that in such cases it has the burden of proof to demonstrate United States nationality, but contends that nonetheless the "burden of evidence" as to this remains with Mexico. This distinction is explained by the United States as arising out of the fact that persons of Mexican nationality may also have acquired United States citizenship by operation of law, depending on their parents' dates and places of birth, places of residency, marital status at time of their birth and so forth. In the view of the United States "virtually all such information is in the hands of Mexico through the now 52 individuals it represents". The United States contends that it was the responsibility of Mexico to produce such information, which responsibility it has not discharged.

57. The Court finds that it is for Mexico to show that the 52 persons listed in paragraph 16 above held Mexican nationality at the time of their arrest. The Court notes that to this end Mexico has produced birth certificates and declarations of nationality, whose contents have not been challenged by the United States.

The Court observes further that the United States has, however, questioned whether some of these individuals were not also United States nationals. Thus, the United States has informed the Court that, "in the case of defendant Ayala (case No. 2) we are close to certain that Ayala is a United States citizen", and that this could be confirmed with absolute certainty if Mexico produced facts about this matter. Similarly Mr. Avena (case No. 1) was said to be "likely" to be a United States citizen, and there was "some possibility" that some 16 other defendants were United States citizens. As to six others, the United States said it "cannot rule out the possibility" of United States nationality. The Court takes the view that it was for the United States to demonstrate that this was so and to furnish the Court with all information on the matter in its possession. In so far as relevant data on that matter are said by the United States to lie within the knowledge of Mexico, it was for the United States to have

sought that information from the Mexican authorities. The Court cannot accept that, because such information may have been in part in the hands of Mexico, it was for Mexico to produce such information. It was for the United States to seek such information, with sufficient specificity, and to demonstrate both that this was done and that the Mexican authorities declined or failed to respond to such specific requests. At no stage, however, has the United States shown the Court that it made specific enquiries of those authorities about particular cases and that responses were not forthcoming. The Court accordingly concludes that the United States has not met its burden of proof in its attempt to show that persons of Mexican nationality were also United States nationals.

The Court therefore finds that, as regards the 52 persons listed in paragraph 16 above, the United States had obligations under Article 36, paragraph 1 (*b*).

58. Mexico asks the Court to find that

“the obligation in Article 36, paragraph 1, of the Vienna Convention requires notification of consular rights and a reasonable opportunity for consular access before the competent authorities of the receiving State take any action potentially detrimental to the foreign national’s rights”.

59. Mexico contends that, in each of the 52 cases before the Court, the United States failed to provide the arrested persons with information as to their rights under Article 36, paragraph 1 (*b*), “without delay”. It alleges that in one case, Mr. Esquivel (case No. 7), the arrested person was informed, but only some 18 months after the arrest, while in another, that of Mr. Juárez (case No. 10), information was given to the arrested person of his rights some 40 hours after arrest. Mexico contends that this still constituted a violation, because “without delay” is to be understood as meaning “immediately”, and in any event before any interrogation occurs. Mexico further draws the Court’s attention to the fact that in this case a United States court found that there had been a violation of Article 36, paragraph 1 (*b*), and claims that the United States cannot disavow such a determination by its own courts. In an Annex to its Memorial, Mexico mentions that, in a third case (Mr. Ayala, case No. 2), the accused was informed of his rights upon his arrival on death row, some four years after arrest. Mexico contends that in the remaining cases the Mexicans concerned were in fact never so informed by the United States authorities.

60. The United States disputes both the facts as presented by Mexico and the legal analysis of Article 36, paragraph 1 (*b*), of the Vienna Convention offered by Mexico. The United States claims that Mr. Solache (case No. 47) was informed of his rights under the Vienna Convention

some seven months after his arrest. The United States further claims that many of the persons concerned were of United States nationality and that at least seven of these individuals "appear to have affirmatively claimed to be United States citizens at the time of their arrest". These cases were said to be those of Avena (case No. 1), Ayala (case No. 2), Benavides (case No. 3), Ochoa (case No. 18), Salcido (case No. 22), Tafoya (case No. 24), and Alvarez (case No. 30). In the view of the United States no duty of consular information arose in these cases. Further, in the contention of the United States, in the cases of Mr. Ayala (case No. 2) and Mr. Salcido (case No. 22) there was no reason to believe that the arrested persons were Mexican nationals at any stage; the information in the case of Mr. Juárez (case No. 10) was given "without delay".

61. The Court thus now turns to the interpretation of Article 36, paragraph 1 (*b*), having found in paragraph 57 above that it is applicable to the 52 persons listed in paragraph 16. It begins by noting that Article 36, paragraph 1 (*b*), contains three separate but interrelated elements: the right of the individual concerned to be informed without delay of his rights under Article 36, paragraph 1 (*b*); the right of the consular post to be notified without delay of the individual's detention, if he so requests; and the obligation of the receiving State to forward without delay any communication addressed to the consular post by the detained person.

62. The third element of Article 36, paragraph 1 (*b*), has not been raised on the facts before the Court. The Court thus begins with the right of an arrested or detained individual to information.

63. The Court finds that the duty upon the detaining authorities to give the Article 36, paragraph 1 (*b*), information to the individual arises once it is realized that the person is a foreign national, or once there are grounds to think that the person is probably a foreign national. Precisely when this may occur will vary with circumstances. The United States Department of State booklet, *Consular Notification and Access — Instructions for Federal, State and Local Law Enforcement and Other Officials Regarding Foreign Nationals in the United States and the Rights of Consular Officials to Assist Them*, issued to federal, state and local authorities in order to promote compliance with Article 36 of the Vienna Convention points out in such cases that: "most, but not all, persons born outside the United States are not [citizens]. Unfamiliarity with English may also indicate foreign nationality." The Court notes that when an arrested person himself claims to be of United States nationality, the realization by the authorities that he is not in fact a United States national, or grounds for that realization, is likely to come somewhat later in time.

64. The United States has told the Court that millions of aliens reside, either legally or illegally, on its territory, and moreover that its laws concerning citizenship are generous. The United States has also pointed out that it is a multicultural society, with citizenship being held by persons of diverse appearance, speaking many languages. The Court appreciates that in the United States the language that a person speaks, or his appearance, does not necessarily indicate that he is a foreign national. Nevertheless, and particularly in view of the large numbers of foreign nationals living in the United States, these very circumstances suggest that it would be desirable for enquiry routinely to be made of the individual as to his nationality upon his detention, so that the obligations of the Vienna Convention may be complied with. The United States has informed the Court that some of its law enforcement authorities do routinely ask persons taken into detention whether they are United States citizens. Indeed, were each individual to be told at that time that, should he be a foreign national, he is entitled to ask for his consular post to be contacted, compliance with this requirement under Article 36, paragraph 1 (*b*), would be greatly enhanced. The provision of such information could parallel the reading of those rights of which any person taken into custody in connection with a criminal offence must be informed prior to interrogation by virtue of what in the United States is known as the "Miranda rule"; these rights include, *inter alia*, the right to remain silent, the right to have an attorney present during questioning, and the right to have an attorney appointed at government expense if the person cannot afford one. The Court notes that, according to the United States, such a practice in respect of the Vienna Convention rights is already being followed in some local jurisdictions.

65. Bearing in mind the complexities explained by the United States, the Court now begins by examining the application of Article 36, paragraph 1 (*b*), of the Vienna Convention to the 52 cases. In 45 of these cases, the Court has no evidence that the arrested persons claimed United States nationality, or were reasonably thought to be United States nationals, with specific enquiries being made in timely fashion to verify such dual nationality. The Court has explained in paragraph 57 above what enquiries it would have expected to have been made, within a short time period, and what information should have been provided to the Court.

66. Seven persons, however, are asserted by the United States to have stated at the time of arrest that they were United States citizens. Only in the case of Mr. Salcido (case No. 22) has the Court been provided by the United States with evidence of such a statement. This has been acknowledged by Mexico. Further, there has been no evidence before the Court to suggest that there were in this case at the same time also indications of Mexican nationality, which should have caused rapid enquiry by the arresting authorities and the providing of consular information "without delay". Mexico has accordingly not shown that in

the case of Mr. Salcido the United States violated its obligations under Article 36, paragraph 1 (*b*).

67. In the case of Mr. Ayala (case No. 2), while he was identified in a court record in 1989 (three years after his arrest) as a United States citizen, there is no evidence to show this Court that the accused did indeed claim upon his arrest to be a United States citizen. The Court has not been informed of any enquiries made by the United States to confirm these assertions of United States nationality.

68. In the five other cases listed by the United States as cases where the individuals "appear to have affirmatively claimed to be United States citizens at the time of their arrest", no evidence has been presented that such a statement was made at the time of arrest.

69. Mr. Avena (case No. 1) is listed in his arrest report as having been born in California. His prison records describe him as of Mexican nationality. The United States has not shown the Court that it was engaged in enquiries to confirm United States nationality.

70. Mr. Benavides (case No. 3) was carrying an Immigration and Naturalization Service immigration card at the time of arrest in 1991. The Court has not been made aware of any reason why the arresting authorities should nonetheless have believed at the time of arrest that he was a United States national. The evidence that his defence counsel in June 1993 informed the court that Mr. Benavides had become a United States citizen is irrelevant to what was understood as to his nationality at time of arrest.

71. So far as Mr. Ochoa is concerned (case No. 18), the Court observes that his arrest report in 1990 refers to him as having been born in Mexico, an assertion that is repeated in a second police report. Some two years later details in his court record refer to him as a United States citizen born in Mexico. The Court is not provided with any further details. The United States has not shown this Court that it was aware of, or was engaged in active enquiry as to, alleged United States nationality at the time of his arrest.

72. Mr. Tafoya (case No. 24) was listed on the police booking sheet as having been born in Mexico. No further information is provided by the United States as to why this was done and what, if any, further enquiries were being made concerning the defendant's nationality.

73. Finally, the last of the seven persons referred to by the United States in this group, Mr. Alvarez (case No. 30), was arrested in Texas on 20 June 1998. Texas records identified him as a United States citizen. Within three days of his arrest, however, the Texas authorities were

informed that the Immigration and Naturalization Service was holding investigations to determine whether, because of a previous conviction, Mr. Alvarez was subject to deportation as a foreign national. The Court has not been presented with evidence that rapid resolution was sought as to the question of Mr. Alvarez's nationality.

74. The Court concludes that Mexico has failed to prove the violation by the United States of its obligations under Article 36, paragraph 1 (*b*), in the case of Mr. Salcido (case No. 22), and his case will not be further commented upon. On the other hand, as regards the other individuals who are alleged to have claimed United States nationality on arrest, whose cases have been considered in paragraphs 67 to 73 above, the argument of the United States cannot be upheld.

75. The question nonetheless remains as to whether, in each of the 45 cases referred to in paragraph 65 and of the six cases mentioned in paragraphs 67 to 73, the United States did provide the required information to the arrested persons "without delay". It is to that question that the Court now turns.

76. The Court has been provided with declarations from a number of the Mexican nationals concerned that attest to their never being informed of their rights under Article 36, paragraph 1 (*b*). The Court at the outset notes that, in 47 such cases, the United States nowhere challenges this fact of information not being given. Nevertheless, in the case of Mr. Hernández (case No. 34), the United States observes that

"Although the [arresting] officer did not ask Hernández Llanas whether he wanted them to inform the Mexican Consulate of his arrest, it was certainly not unreasonable for him to assume that an escaped convict would not want the Consulate of the country from which he escaped notified of his arrest."

The Court notes that the clear duty to provide consular information under Article 36, paragraph 1 (*b*), does not invite assumptions as to what the arrested person might prefer, as a ground for not informing him. It rather gives the arrested person, once informed, the right to say he nonetheless does not wish his consular post to be notified. It necessarily follows that in each of these 47 cases, the duty to inform "without delay" has been violated.

77. In four cases, namely Ayala (case No. 2), Esquivel (case No. 7), Juárez (case No. 10) and Solache (case No. 47), some doubts remain as to whether the information that was given was provided without delay. For these, some examination of the term is thus necessary.

78. This is a matter on which the Parties have very different views.

According to Mexico, the timing of the notice to the detained person "is critical to the exercise of the rights provided by Article 36" and the phrase "without delay" in paragraph 1 (b) requires "unqualified immediacy". Mexico further contends that, in view of the object and purpose of Article 36, which is to enable "meaningful consular assistance" and the safeguarding of the vulnerability of foreign nationals in custody,

"consular notification . . . must occur immediately upon detention and prior to any interrogation of the foreign detainee, so that the consul may offer useful advice about the foreign legal system and provide assistance in obtaining counsel before the foreign national makes any ill-informed decisions or the State takes any action potentially prejudicial to his rights".

79. Thus, in Mexico's view, it would follow that in any case in which a foreign national was interrogated before being informed of his rights under Article 36, there would *ipso facto* be a breach of that Article, however rapidly after the interrogation the information was given to the foreign national. Mexico accordingly includes the case of Mr. Juárez among those where it claims violation of Article 36, paragraph 1 (b), as he was interrogated before being informed of his consular rights, some 40 hours after arrest.

80. Mexico has also invoked the *travaux préparatoires* of the Vienna Convention in support of its interpretation of the requirement that the arrested person be informed "without delay" of the right to ask that the consular post be notified. In particular, Mexico recalled that the phrase proposed to the Conference by the International Law Commission, "without undue delay", was replaced by the United Kingdom proposal to delete the word "undue". The United Kingdom representative had explained that this would avoid the implication that "some delay was permissible" and no delegate had expressed dissent with the USSR and Japanese statements that the result of the amendment would be to require information "immediately".

81. The United States disputed this interpretation of the phrase "without delay". In its view it did not mean "immediately, and before interrogation" and such an understanding was supported neither by the terminology, nor by the object and purpose of the Vienna Convention, nor by its *travaux préparatoires*. In the booklet referred to in paragraph 63 above, the State Department explains that "without delay" means "there should be no deliberate delay" and that the required action should be taken "as soon as reasonably possible under the circumstances". It was normally to be expected that "notification to consular officers" would have been made "within 24 to 72 hours of the arrest or detention". The United States further contended that such an interpretation of the words "without delay" would be reasonable in itself and also allow a consistent

interpretation of the phrase as it occurs in each of three different occasions in Article 36, paragraph 1 (*b*). As for the *travaux préparatoires*, they showed only that undue or deliberate delay had been rejected as unacceptable.

82. According to the United States, the purpose of Article 36 was to facilitate the exercise of consular functions by a consular officer:

“The significance of giving consular information to a national is thus limited . . . It is a procedural device that allows the foreign national to trigger the related process of notification . . . [It] cannot possibly be fundamental to the criminal justice process.”

83. The Court now addresses the question of the proper interpretation of the expression “without delay” in the light of arguments put to it by the Parties. The Court begins by noting that the precise meaning of “without delay”, as it is to be understood in Article 36, paragraph 1 (*b*), is not defined in the Convention. This phrase therefore requires interpretation according to the customary rules of treaty interpretation reflected in Articles 31 and 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties.

84. Article 1 of the Vienna Convention on Consular Relations, which defines certain of the terms used in the Convention, offers no definition of the phrase “without delay”. Moreover, in the different language versions of the Convention various terms are employed to render the phrases “without delay” in Article 36 and “immediately” in Article 14. The Court observes that dictionary definitions, in the various languages of the Vienna Convention, offer diverse meanings of the term “without delay” (and also of “immediately”). It is therefore necessary to look elsewhere for an understanding of this term.

85. As for the object and purpose of the Convention, the Court observes that Article 36 provides for consular officers to be free to communicate with nationals of the sending State, to have access to them, to visit and speak with them and to arrange for their legal representation. It is not envisaged, either in Article 36, paragraph 1, or elsewhere in the Convention, that consular functions entail a consular officer himself or herself acting as the legal representative or more directly engaging in the criminal justice process. Indeed, this is confirmed by the wording of Article 36, paragraph 2, of the Convention. Thus, neither the terms of the Convention as normally understood, nor its object and purpose, suggest that “without delay” is to be understood as “immediately upon arrest and before interrogation”.

86. The Court further notes that, notwithstanding the uncertainties in the *travaux préparatoires*, they too do not support such an interpreta-

tion. During the diplomatic conference, the conference's expert, former Special Rapporteur of the International Law Commission, explained to the delegates that the words "without undue delay" had been introduced by the Commission, after long discussion in both the plenary and drafting committee, to allow for special circumstances which might permit information as to consular notification not to be given at once. Germany, the only one of two States to present an amendment, proposed adding "but at latest within one month". There was an extended discussion by many different delegates as to what such outer time-limit would be acceptable. During that debate no delegate proposed "immediately". The shortest specific period suggested was by the United Kingdom, namely "promptly" and no later than "48 hours" afterwards. Eventually, in the absence of agreement on a precise time period, the United Kingdom's other proposal to delete the word "undue" was accepted as the position around which delegates could converge. It is also of interest that there is no suggestion in the *travaux* that the phrase "without delay" might have different meanings in each of the three sets of circumstances in which it is used in Article 36, paragraph 1 (*b*).

87. The Court thus finds that "without delay" is not necessarily to be interpreted as "immediately" upon arrest. It further observes that during the Conference debates on this term, no delegate made any connection with the issue of interrogation. The Court considers that the provision in Article 36, paragraph 1 (*b*), that the receiving State authorities "shall inform the person concerned without delay of his rights" cannot be interpreted to signify that the provision of such information must necessarily precede any interrogation, so that the commencement of interrogation before the information is given would be a breach of Article 36.

88. Although, by application of the usual rules of interpretation, "without delay" as regards the duty to inform an individual under Article 36, paragraph 1 (*b*), is not to be understood as necessarily meaning "immediately upon arrest", there is nonetheless a duty upon the arresting authorities to give that information to an arrested person as soon as it is realized that the person is a foreign national, or once there are grounds to think that the person is probably a foreign national.

89. With one exception, no information as to entitlement to consular notification was given in any of the cases cited in paragraph 77 within any of the various time periods suggested by the delegates to the Conference on the Vienna Convention, or by the United States itself (see paragraphs 81 and 86 above). Indeed, the information was given either not at all or at periods very significantly removed from the time of arrest. In the case of Mr. Juárez (case No. 10), the defendant was informed of his

consular rights 40 hours after his arrest. The Court notes, however, that Mr. Juárez's arrest report stated that he had been born in Mexico; moreover, there had been indications of his Mexican nationality from the time of his initial interrogation by agents of the Federal Bureau of Investigation (FBI) following his arrest. It follows that Mr. Juárez's Mexican nationality was apparent from the outset of his detention by the United States authorities. In these circumstances, in accordance with its interpretation of the expression "without delay" (see paragraph 88 above), the Court concludes that the United States violated the obligation incumbent upon it under Article 36, paragraph 1 (*b*), to inform Mr. Juárez without delay of his consular rights. The Court notes that the same finding was reached by a California Superior Court, albeit on different grounds.

90. The Court accordingly concludes that, with respect to each of the individuals listed in paragraph 16, with the exception of Mr. Salcido (case No. 22; see paragraph 74 above), the United States has violated its obligation under Article 36, paragraph 1 (*b*), of the Vienna Convention to provide information to the arrested person.

91. As noted above, Article 36, paragraph 1 (*b*), contains three elements. Thus far, the Court has been dealing with the right of an arrested person to be informed that he may ask for his consular post to be notified. The Court now turns to another aspect of Article 36, paragraph 1 (*b*). The Court finds the United States is correct in observing that the fact that a Mexican consular post was not notified under Article 36, paragraph 1 (*b*), does not of necessity show that the arrested person was not informed of his rights under that provision. He may have been informed and declined to have his consular post notified. The giving of the information is relevant, however, for satisfying the element in Article 36, paragraph 1 (*b*), on which the other two elements therein depend.

92. In only two cases has the United States claimed that the arrested person was informed of his consular rights but asked for the consular post not to be notified. These are Mr. Juárez (case No. 10) and Mr. Solache (case No. 47).

93. The Court is satisfied that when Mr. Juárez (case No. 10) was informed of his consular rights 40 hours after his arrest (see paragraph 89) he chose not to have his consular post notified. As regards Mr. Solache (case No. 47), however, it is not sufficiently clear to the Court, on the evidence before it, that he requested that his consular post should not be notified. Indeed, the Court has not been provided with any reasons as to why, if a request of non-notification was made, the consular post was then notified some three months later.

94. In a further three cases, the United States alleges that the consular post was formally notified of the detention of one of its Mexican

nationals without prior information to the individual as to his consular rights. These are Mr. Covarrubias (case No. 6), Mr. Hernández (case No. 34) and Mr. Reyes (case No. 54). The United States further contends that the Mexican authorities were contacted regarding the case of Mr. Loza (case No. 52).

95. The Court notes that, in the case of Mr. Covarrubias (case No. 6), the consular authorities learned from third parties of his arrest shortly after it occurred. Some 16 months later, a court-appointed interpreter requested that the consulate intervene in the case prior to trial. It would appear doubtful whether an interpreter can be considered a competent authority for triggering the interrelated provisions of Article 36, paragraph 1 (*b*), of the Vienna Convention. In the case of Mr. Reyes (case No. 54), the United States has simply told the Court that an Oregon Department of Justice attorney had advised United States authorities that both the District Attorney and the arresting detective advised the Mexican consular authorities of his arrest. No information is given as to when this occurred, in relation to the date of his arrest. Mr. Reyes did receive assistance before his trial. In these two cases, the Court considers that, even on the hypothesis that the conduct of the United States had no serious consequences for the individuals concerned, it did nonetheless constitute a violation of the obligations incumbent upon the United States under Article 36, paragraph 1 (*b*).

96. In the case of Mr. Loza (case No. 52), a United States Congressman from Ohio contacted the Mexican Embassy on behalf of Ohio prosecutors, some four months after the accused's arrest, "to enquire about the procedures for obtaining a certified copy of Loza's birth certificate". The Court has not been provided with a copy of the Congressman's letter and is therefore unable to ascertain whether it explained that Mr. Loza had been arrested. The response from the Embassy (which is also not included in the documentation provided to the Court) was passed by the Congressman to the prosecuting attorney, who then asked the Civil Registry of Guadalajara for a copy of the birth certificate. This request made no specific mention of Mr. Loza's arrest. Mexico contends that its consulate was never formally notified of Mr. Loza's arrest, of which it only became aware after he had been convicted and sentenced to death. Mexico includes the case of Mr. Loza among those in which the United States was in breach of its obligation of consular notification. Taking account of all these elements, and in particular of the fact that the Embassy was contacted four months after the arrest, and that the consular post became aware of the defendant's detention only after he had been convicted and sentenced, the Court concludes that in the case of Mr. Loza the United States violated the obligation of consular notification without delay incumbent upon it under Article 36, paragraph 1 (*b*).

97. Mr. Hernández (case No. 34) was arrested in Texas on Wednesday 15 October 1997. The United States authorities had no reason to believe he might have American citizenship. The consular post was notified the following Monday, that is five days (corresponding to only three working days) thereafter. The Court finds that, in the circumstances, the United States did notify the consular post without delay, in accordance with its obligation under Article 36, paragraph 1 (b).

98. In the first of its final submissions, Mexico also asks the Court to find that the violations it ascribes to the United States in respect of Article 36, paragraph 1 (b), have also deprived “Mexico of its right to provide consular protection and the 52 nationals’ right to receive such protection as Mexico would provide under Article 36 (1) (a) and (c) of the Convention”.

99. The relationship between the three subparagraphs of Article 36, paragraph 1, has been described by the Court in its Judgment in the *LaGrand* case (*I.C.J. Reports 2001*, p. 492, para. 74) as “an interrelated régime”. The legal conclusions to be drawn from that interrelationship necessarily depend upon the facts of each case. In the *LaGrand* case, the Court found that the failure for 16 years to inform the brothers of their right to have their consul notified effectively prevented the exercise of other rights that Germany might have chosen to exercise under subparagraphs (a) and (c).

100. It is necessary to revisit the interrelationship of the three subparagraphs of Article 36, paragraph 1, in the light of the particular facts and circumstances of the present case.

101. The Court would first recall that, in the case of Mr. Juárez (case No. 10) (see paragraph 93 above), when the defendant was informed of his rights, he declined to have his consular post notified. Thus in this case there was no violation of either subparagraph (a) or subparagraph (c) of Article 36, paragraph 1.

102. In the remaining cases, because of the failure of the United States to act in conformity with Article 36, paragraph 1 (b), Mexico was in effect precluded (in some cases totally, and in some cases for prolonged periods of time) from exercising its right under paragraph 1 (a) to communicate with its nationals and have access to them. As the Court has already had occasion to explain, it is immaterial whether Mexico would have offered consular assistance, “or whether a different verdict would have been rendered. It is sufficient that the Convention conferred these rights” (*I.C.J. Reports 2001*, p. 492, para. 74), which might have been acted upon.

103. The same is true, *pari passu*, of certain rights identified in subparagraph (c): “consular officers shall have the right to visit a national of the sending State who is in prison, custody or detention, and to converse and correspond with him . . .”.

104. On the other hand, and on the particular facts of this case, no such generalized answer can be given as regards a further entitlement mentioned in subparagraph (c), namely, the right of consular officers "to arrange for [the] legal representation" of the foreign national. Mexico has laid much emphasis in this litigation upon the importance of consular officers being able to arrange for such representation before and during trial, and especially at sentencing, in cases in which a severe penalty may be imposed. Mexico has further indicated the importance of any financial or other assistance that consular officers may provide to defence counsel, *inter alia* for investigation of the defendant's family background and mental condition, when such information is relevant to the case. The Court observes that the exercise of the rights of the sending State under Article 36, paragraph 1 (c), depends upon notification by the authorities of the receiving State. It may be, however, that information drawn to the attention of the sending State by other means may still enable its consular officers to assist in arranging legal representation for its national. In the following cases, the Mexican consular authorities learned of their national's detention in time to provide such assistance, either through notification by United States authorities (albeit belatedly in terms of Article 36, paragraph 1 (b)) or through other channels: Benavides (case No. 3); Covarrubias (case No. 6); Esquivel (case No. 7); Hoyos (case No. 9); Mendoza (case No. 17); Ramirez (case No. 20); Sánchez (case No. 23); Verano (case No. 27); Zamudio (case No. 29); Gómez (case No. 33); Hernández (case No. 34); Ramirez (case No. 41); Rocha (case No. 42); Solache (case No. 47); Camargo (case No. 49) and Reyes (case No. 54).

105. In relation to Mr. Manríquez (case No. 14), the Court lacks precise information as to when his consular post was notified. It is merely given to understand that it was two years prior to conviction, and that Mr. Manríquez himself had never been informed of his consular rights. There is also divergence between the Parties in regard to the case of Mr. Fuentes (case No. 15), where Mexico claims it became aware of his detention during trial and the United States says this occurred during jury selection, prior to the actual commencement of the trial. In the case of Mr. Arias (case No. 44), the Mexican authorities became aware of his detention less than one week before the commencement of the trial. In those three cases, the Court concludes that the United States violated its obligations under Article 36, paragraph 1 (c).

106. On this aspect of the case, the Court thus concludes:

- (1) that the United States committed breaches of the obligation incumbent upon it under Article 36, paragraph 1 (b), of the Vienna Convention to inform detained Mexican nationals of their rights under

that paragraph, in the case of the following 51 individuals: Avena (case No. 1), Ayala (case No. 2), Benavides (case No. 3), Carrera (case No. 4), Contreras (case No. 5), Covarrubias (case No. 6), Esquivel (case No. 7), Gómez (case No. 8), Hoyos (case No. 9), Juárez (case No. 10), López (case No. 11), Lupercio (case No. 12), Maciel (case No. 13), Manríquez (case No. 14), Fuentes (case No. 15), Martínez (case No. 16), Mendoza (case No. 17), Ochoa (case No. 18), Parra (case No. 19), Ramírez (case No. 20), Salazar (case No. 21), Sánchez (case No. 23), Tafoya (case No. 24), Valdez (case No. 25), Vargas (case No. 26), Verano (case No. 27), Zamudio (case No. 29), Alvarez (case No. 30), Fierro (case No. 31), García (case No. 32), Gómez (case No. 33), Hernández (case No. 34), Ibarra (case No. 35), Leal (case No. 36), Maldonado (case No. 37), Medellín (case No. 38), Moreno (case No. 39), Plata (case No. 40), Ramírez (case No. 41), Rocha (case No. 42), Regalado (case No. 43), Arias (case No. 44), Caballero (case No. 45), Flores (case No. 46), Solache (case No. 47), Fong (case No. 48), Camargo (case No. 49), Pérez (case No. 51), Loza (case No. 52), Torres (case No. 53) and Reyes (case No. 54);

- (2) that the United States committed breaches of the obligation incumbent upon it under Article 36, paragraph 1 (*b*), to notify the Mexican consular post of the detention of the Mexican nationals listed in subparagraph (1) above, except in the cases of Mr. Juárez (No. 10) and Mr. Hernández (No. 34);
- (3) that by virtue of its breaches of Article 36, paragraph 1 (*b*), as described in subparagraph (2) above, the United States also violated the obligation incumbent upon it under Article 36, paragraph 1 (*a*), of the Vienna Convention to enable Mexican consular officers to communicate with and have access to their nationals, as well as its obligation under paragraph 1 (*c*) of that Article regarding the right of consular officers to visit their detained nationals;
- (4) that the United States, by virtue of these breaches of Article 36, paragraph 1 (*b*), also violated the obligation incumbent upon it under paragraph 1 (*c*) of that Article to enable Mexican consular officers to arrange for legal representation of their nationals in the case of the following individuals: Avena (case No. 1), Ayala (case No. 2), Carrera (case No. 4), Contreras (case No. 5), Gómez (case No. 8), López (case No. 11), Lupercio (case No. 12), Maciel (case No. 13), Manríquez (case No. 14), Fuentes (case No. 15), Martínez (case No. 16), Ochoa (case No. 18), Parra (case No. 19), Salazar (case No. 21), Tafoya (case No. 24), Valdez (case No. 25), Vargas (case No. 26), Alvarez (case No. 30), Fierro (case No. 31), García (case No. 32), Ibarra (case No. 35), Leal (case No. 36), Maldonado (case No. 37), Medellín (case No. 38), Moreno (case No. 39), Plata (case No. 40), Regalado (case No. 43), Arias (case No. 44), Caballero (case No. 45),

Flores (case No. 46), Fong (case No. 48), Pérez (case No. 51), Loza (case No. 52) and Torres (case No. 53).

*

ARTICLE 36, PARAGRAPH 2

107. In its third final submission Mexico asks the Court to adjudge and declare that

“the United States violated its obligations under Article 36 (2) of the Vienna Convention by failing to provide meaningful and effective review and reconsideration of convictions and sentences impaired by a violation of Article 36 (1)”.

108. Article 36, paragraph 2, provides:

“The rights referred to in paragraph 1 of this article shall be exercised in conformity with the laws and regulations of the receiving State, subject to the proviso, however, that the said laws and regulations must enable full effect to be given to the purposes for which the rights accorded under this article are intended.”

109. In this connection, Mexico has argued that the United States

“By applying provisions of its municipal law to defeat or foreclose remedies for the violation of rights conferred by Article 36 — thus failing to provide meaningful review and reconsideration of severe sentences imposed in proceedings that violated Article 36 — . . . has violated, and continues to violate, the Vienna Convention.”

More specifically, Mexico contends that:

“The United States uses several municipal legal doctrines to prevent finding any legal effect from the violations of Article 36. *First*, despite this Court’s clear analysis in *LaGrand*, US courts, at both the state and federal level, continue to invoke default doctrines to bar any review of Article 36 violations — even when the national had been unaware of his rights to consular notification and communication and thus his ability to raise their violation as an issue at trial, due to the competent authorities’ failure to comply with Article 36.”

110. Against this contention by Mexico, the United States argues that:

“the criminal justice systems of the United States address all errors

in process through both judicial and executive clemency proceedings, relying upon the latter when rules of default have closed out the possibility of the former. That is, the 'laws and regulations' of the United States provide for the correction of mistakes that may be relevant to a criminal defendant to occur through a combination of judicial review and clemency. These processes together, working with other competent authorities, give full effect to the purposes for which Article 36 (1) is intended, in conformity with Article 36 (2). And, insofar as a breach of Article 36 (1) has occurred, these procedures satisfy the remedial function of Article 36 (2) by allowing the United States to provide review and reconsideration of convictions and sentences consistent with *LaGrand*."

111. The "procedural default" rule in United States law has already been brought to the attention of the Court in the *LaGrand* case. The following brief definition of the rule was provided by Mexico in its Memorial in this case and has not been challenged by the United States: "a defendant who could have raised, but fails to raise, a legal issue at trial will generally not be permitted to raise it in future proceedings, on appeal or in a petition for a writ of *habeas corpus*". The rule requires exhaustion of remedies, *inter alia*, at the state level and before a *habeas corpus* motion can be filed with federal courts. In the *LaGrand* case, the rule in question was applied by United States federal courts; in the present case, Mexico also complains of the application of the rule in certain state courts of criminal appeal.

112. The Court has already considered the application of the "procedural default" rule, alleged by Mexico to be a hindrance to the full implementation of the international obligations of the United States under Article 36, in the *LaGrand* case, when the Court addressed the issue of its implications for the application of Article 36, paragraph 2, of the Vienna Convention. The Court emphasized that "a distinction must be drawn between that rule as such and its specific application in the present case". The Court stated:

"In itself, the rule does not violate Article 36 of the Vienna Convention. The problem arises when the procedural default rule does not allow the detained individual to challenge a conviction and sentence by claiming, in reliance on Article 36, paragraph 1, of the Convention, that the competent national authorities failed to comply with their obligation to provide the requisite consular information 'without delay', thus preventing the person from seeking and obtaining consular assistance from the sending State." (*I.C.J. Reports 2001*, p. 497, para. 90.)

On this basis, the Court concluded that “the procedural default rule prevented counsel for the LaGrands to effectively challenge their convictions and sentences other than on United States constitutional grounds” (*I.C.J. Reports 2001*, p. 497, para. 91). This statement of the Court seems equally valid in relation to the present case, where a number of Mexican nationals have been placed exactly in such a situation.

113. The Court will return to this aspect below, in the context of Mexico’s claims as to remedies. For the moment, the Court simply notes that the procedural default rule has not been revised, nor has any provision been made to prevent its application in cases where it has been the failure of the United States itself to inform that may have precluded counsel from being in a position to have raised the question of a violation of the Vienna Convention in the initial trial. It thus remains the case that the procedural default rule may continue to prevent courts from attaching legal significance to the fact, *inter alia*, that the violation of the rights set forth in Article 36, paragraph 1, prevented Mexico, in a timely fashion, from retaining private counsel for certain nationals and otherwise assisting in their defence. In such cases, application of the procedural default rule would have the effect of preventing “full effect [from being] given to the purposes for which the rights accorded under this article are intended”, and thus violate paragraph 2 of Article 36. The Court notes moreover that in several of the cases cited in Mexico’s final submissions the procedural default rule has already been applied, and that in others it could be applied at subsequent stages in the proceedings. However, in none of the cases, save for the three mentioned in paragraph 114 below, have the criminal proceedings against the Mexican nationals concerned already reached a stage at which there is no further possibility of judicial re-examination of those cases; that is to say, all possibility is not yet excluded of “review and reconsideration” of conviction and sentence, as called for in the *LaGrand* case, and as explained further in paragraphs 128 and following below. It would therefore be premature for the Court to conclude at this stage that, in those cases, there is already a violation of the obligations under Article 36, paragraph 2, of the Vienna Convention.

114. By contrast, the Court notes that in the case of three Mexican nationals, Mr. Fierro (case No. 31), Mr. Moreno (case No. 39), and Mr. Torres (case No. 53), conviction and sentence have become final. Moreover, in the case of Mr. Torres the Oklahoma Court of Criminal Appeals has set an execution date (see paragraph 21 above, *in fine*). The Court must therefore conclude that, in relation to these three individuals, the United States is in breach of the obligations incumbent upon it under Article 36, paragraph 2, of the Vienna Convention.

* *

LEGAL CONSEQUENCES OF THE BREACH

115. Having concluded that in most of the cases brought before the Court by Mexico in the 52 instances, there has been a failure to observe the obligations prescribed by Article 36, paragraph 1 (b), of the Vienna Convention, the Court now proceeds to the examination of the legal consequences of such a breach and of what legal remedies should be considered for the breach.

116. Mexico in its fourth, fifth and sixth submissions asks the Court to adjudge and declare:

- “(4) that pursuant to the injuries suffered by Mexico in its own right and in the exercise of diplomatic protection of its nationals, Mexico is entitled to full reparation for these injuries in the form of *restitutio in integrum*;
- (5) that this restitution consists of the obligation to restore the *status quo ante* by annulling or otherwise depriving of full force or effect the conviction and sentences of all 52 Mexican nationals; [and]
- (6) that this restitution also includes the obligation to take all measures necessary to ensure that a prior violation of Article 36 shall not affect the subsequent proceedings.”

117. In support of its fourth and fifth submissions, Mexico argues that “It is well-established that the primary form of reparation available to a State injured by an internationally wrongful act is *restitutio in integrum*”, and that “The United States is therefore obliged to take the necessary action to restore the *status quo ante* in respect of Mexico’s nationals detained, tried, convicted and sentenced in violation of their internationally recognized rights.” To restore the *status quo ante*, Mexico contends that “restitution here must take the form of annulment of the convictions and sentences that resulted from the proceedings tainted by the Article 36 violations”, and that “It follows from the very nature of *restitutio* that, when a violation of an international obligation is manifested in a judicial act, that act must be annulled and thereby deprived of any force or effect in the national legal system.” Mexico therefore asks in its submissions that the convictions and sentences of the 52 Mexican nationals be annulled, and that, in any future criminal proceedings against these 52 Mexican nationals, evidence obtained in breach of Article 36 of the Vienna Convention be excluded.

118. The United States on the other hand argues:

“*LaGrand’s* holding calls for the United States to provide, in each case, ‘review and reconsideration’ that ‘takes account of’ the viola-

tion, not 'review and reversal', not across-the-board exclusions of evidence or nullification of convictions simply because a breach of Article 36 (1) occurred and without regard to its effect upon the conviction and sentence and, not . . . 'a precise, concrete, stated result: to re-establish the *status quo ante*'".

119. The general principle on the legal consequences of the commission of an internationally wrongful act was stated by the Permanent Court of International Justice in the *Factory at Chorzów* case as follows: "It is a principle of international law that the breach of an engagement involves an obligation to make reparation in an adequate form." (*Factory at Chorzów, Jurisdiction, 1927, P.C.I.J., Series A, No. 9, p. 21.*) What constitutes "reparation in an adequate form" clearly varies depending upon the concrete circumstances surrounding each case and the precise nature and scope of the injury, since the question has to be examined from the viewpoint of what is the "reparation in an adequate form" that corresponds to the injury. In a subsequent phase of the same case, the Permanent Court went on to elaborate on this point as follows:

"The essential principle contained in the actual notion of an illegal act — a principle which seems to be established by international practice and in particular by the decisions of arbitral tribunals — is that reparation must, as far as possible, wipe out all the consequences of the illegal act and reestablish the situation which would, in all probability, have existed if that act had not been committed." (*Factory at Chorzów, Merits, 1928, P.C.I.J., Series A, No. 17, p. 47.*)

120. In the *LaGrand* case the Court made a general statement on the principle involved as follows:

"The Court considers in this respect that if the United States, notwithstanding its commitment [to ensure implementation of the specific measures adopted in performance of its obligations under Article 36, paragraph 1 (b)], should fail in its obligation of consular notification to the detriment of German nationals, an apology would not suffice in cases where the individuals concerned have been subjected to prolonged detention or convicted and sentenced to severe penalties. In the case of such a conviction and sentence, it would be incumbent upon the United States to allow the review and reconsideration of the conviction and sentence by taking account of the violation of the rights set forth in the Convention. This obligation can be carried out in various ways. The choice of means must be left to the United States." (*I.C.J. Reports 2001, pp. 513-514, para. 125.*)

121. Similarly, in the present case the Court's task is to determine what would be adequate reparation for the violations of Article 36. It should be clear from what has been observed above that the internationally wrongful acts committed by the United States were the failure of its

competent authorities to inform the Mexican nationals concerned, to notify Mexican consular posts and to enable Mexico to provide consular assistance. It follows that the remedy to make good these violations should consist in an obligation on the United States to permit review and reconsideration of these nationals' cases by the United States courts, as the Court will explain further in paragraphs 128 to 134 below, with a view to ascertaining whether in each case the violation of Article 36 committed by the competent authorities caused actual prejudice to the defendant in the process of administration of criminal justice.

122. The Court reaffirms that the case before it concerns Article 36 of the Vienna Convention and not the correctness as such of any conviction or sentencing. The question of whether the violations of Article 36, paragraph 1, are to be regarded as having, in the causal sequence of events, ultimately led to convictions and severe penalties is an integral part of criminal proceedings before the courts of the United States and is for them to determine in the process of review and reconsideration. In so doing, it is for the courts of the United States to examine the facts, and in particular the prejudice and its causes, taking account of the violation of the rights set forth in the Convention.

123. It is not to be presumed, as Mexico asserts, that partial or total annulment of conviction or sentence provides the necessary and sole remedy. In this regard, Mexico cites the recent Judgment of this Court in the case concerning the *Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium)*, in which the "Court ordered the cancellation of an arrest warrant issued by a Belgian judicial official in violation of the international immunity of the Congo Minister for Foreign Affairs". However, the present case has clearly to be distinguished from the *Arrest Warrant* case. In that case, the question of the legality under international law of the act of issuing the arrest warrant against the Congolese Minister for Foreign Affairs by the Belgian judicial authorities was itself the subject-matter of the dispute. Since the Court found that act to be in violation of international law relating to immunity, the proper legal consequence was for the Court to order the cancellation of the arrest warrant in question (*I.C.J. Reports 2002*, p. 33). By contrast, in the present case it is not the convictions and sentences of the Mexican nationals which are to be regarded as a violation of international law, but solely certain breaches of treaty obligations which preceded them.

124. Mexico has further contended that the right to consular notification and consular communication under the Vienna Convention is a fundamental human right that constitutes part of due process in criminal proceedings and should be guaranteed in the territory of each of the Contracting Parties to the Vienna Convention; according to Mexico, this

right, as such, is so fundamental that its infringement will *ipso facto* produce the effect of vitiating the entire process of the criminal proceedings conducted in violation of this fundamental right. Whether or not the Vienna Convention rights are human rights is not a matter that this Court need decide. The Court would, however, observe that neither the text nor the object and purpose of the Convention, nor any indication in the *travaux préparatoires*, support the conclusion that Mexico draws from its contention in that regard.

125. For these reasons, Mexico's fourth and fifth submissions cannot be upheld.

126. The reasoning of the Court on the fifth submission of Mexico is equally valid in relation to the sixth submission of Mexico. In elaboration of its sixth submission, Mexico contends that,

"As an aspect of *restitutio in integrum*, Mexico is also entitled to an order that in any subsequent criminal proceedings against the nationals, statements and confessions obtained prior to notification to the national of his right to consular assistance be excluded."

Mexico argues that "The exclusionary rule applies in both common law and civil law jurisdictions and requires the exclusion of evidence that is obtained in a manner that violates due process obligations", and on this basis concludes that

"The status of the exclusionary rule as a general principle of law permits the Court to order that the United States is obligated to apply this principle in respect of statements and confessions given to United States law enforcement officials prior to the accused Mexican nationals being advised of their consular rights in any subsequent criminal proceedings against them."

127. The Court does not consider that it is necessary to enter into an examination of the merits of the contention advanced by Mexico that the "exclusionary rule" is "a general principle of law under Article 38 (1) (c) of the . . . Statute" of the Court. The issue raised by Mexico in its sixth submission relates to the question of what legal consequences flow from the breach of the obligations under Article 36, paragraph 1 — a question which the Court has already sufficiently discussed above in relation to the fourth and the fifth submissions of Mexico. The Court is of the view that this question is one which has to be examined under the concrete circumstances of each case by the United States courts concerned in the process of their review and reconsideration. For this reason, the sixth submission of Mexico cannot be upheld.

128. While the Court has rejected the fourth, fifth and sixth submissions of Mexico relating to the remedies for the breaches by the United

States of its international obligations under Article 36 of the Vienna Convention, the fact remains that such breaches have been committed, as the Court has found, and it is thus incumbent upon the Court to specify what remedies are required in order to redress the injury done to Mexico and to its nationals by the United States through non-compliance with those international obligations. As has already been observed in paragraph 120, the Court in the *LaGrand* Judgment stated the general principle to be applied in such cases by way of a remedy to redress an injury of this kind (*I.C.J. Reports 2001*, pp. 513-514, para. 125).

129. In this regard, Mexico's seventh submission also asks the Court to adjudge and declare:

"That to the extent that any of the 52 convictions or sentences are not annulled, the United States shall provide, by means of its own choosing, meaningful and effective review and reconsideration of the convictions and sentences of the 52 nationals, and that this obligation cannot be satisfied by means of clemency proceedings or if any municipal law rule or doctrine [that fails to attach legal significance to an Article 36 (1) violation] is applied."

130. On this question of "review and reconsideration", the United States takes the position that it has indeed conformed its conduct to the *LaGrand* Judgment. In a further elaboration of this point, the United States argues that "[t]he Court said in *LaGrand* that the choice of means for allowing the review and reconsideration it called for 'must be left' to the United States", but that "Mexico would not leave this choice to the United States but have the Court undertake the review instead and decide at once that the breach requires the conviction and sentence to be set aside in each case".

131. In stating in its Judgment in the *LaGrand* case that "the United States of America, *by means of its own choosing*, shall allow the review and reconsideration of the conviction and sentence" (*I.C.J. Reports 2001*, p. 516, para. 128 (7); emphasis added), the Court acknowledged that the concrete modalities for such review and reconsideration should be left primarily to the United States. It should be underlined, however, that this freedom in the choice of means for such review and reconsideration is not without qualification: as the passage of the Judgment quoted above makes abundantly clear, such review and reconsideration has to be carried out "by taking account of the violation of the rights set forth in the Convention" (*I.C.J. Reports 2001*, p. 514, para. 125), including, in particular, the question of the legal consequences of the violation upon the criminal proceedings that have followed the violation.

132. The United States argues (1) "that the Court's decision in *LaGrand* in calling for review and reconsideration called for a process to re-examine a conviction and sentence in light of a breach of Article 36"; (2) that, "in calling for a process of review, the Court necessarily implied that one legitimate result of that process might be a conclusion that the conviction and sentence should stand"; and (3) "that the relief Mexico seeks in this

case is flatly inconsistent with the Judgment in *LaGrand*: it seeks precisely the award of a substantive outcome that the *LaGrand* Court declined to provide”.

133. However, the Court wishes to point out that the current situation in the United States criminal procedure, as explained by the Agent at the hearings, is that

“If the defendant alleged at trial that a failure of consular information resulted in harm to a particular right essential to a fair trial, an appeals court can review how the lower court handled that claim of prejudice”,

but that

“If the foreign national did not raise his Article 36 claim at trial, he may face procedural constraints [i.e., the application of the procedural default rule] on raising that particular claim in direct or collateral judicial appeals” (emphasis added).

As a result, a claim based on the violation of Article 36, paragraph 1, of the Vienna Convention, however meritorious in itself, could be barred in the courts of the United States by the operation of the procedural default rule (see paragraph 111 above).

134. It is not sufficient for the United States to argue that “[w]hatever label [the Mexican defendant] places on his claim, his right . . . must and will be vindicated if it is raised *in some form* at trial” (emphasis added), and that

“In that way, even though a failure to label the complaint as a breach of the Vienna Convention may mean that he has technically speaking forfeited his right to raise this issue as a Vienna Convention claim, on appeal that failure would not bar him from independently asserting a claim that he was prejudiced because he lacked this critical protection needed for a fair trial.” (Emphasis added.)

The crucial point in this situation is that, by the operation of the procedural default rule as it is applied at present, the defendant is effectively barred from raising the issue of the violation of his rights under Article 36 of the Vienna Convention and is limited to seeking the vindication of his rights under the United States Constitution.

*

135. Mexico, in the latter part of its seventh submission, has stated that “this obligation [of providing review and reconsideration] cannot be

satisfied by means of clemency proceedings". Mexico elaborates this point by arguing first of all that "the United States's reliance on clemency proceedings is wholly inconsistent with its obligation to provide a remedy, as that obligation was found by this Court in *LaGrand*". More specifically, Mexico contends:

"First, it is clear that the Court's direction to the United States in *LaGrand* clearly contemplated that 'review and reconsideration' would be carried out by judicial procedures

Second, the Court was fully aware that the LaGrand brothers had received a clemency hearing, during which the Arizona Pardons Board took into account the violation of their consular rights. Accordingly, the Court determined in *LaGrand* that clemency review alone did not constitute the required 'review and reconsideration' . . .

Finally, the Court specified that the United States must 'allow the review and reconsideration of the *conviction and sentence* by taking account of the violation of the rights set forth in the Convention' . . . it is a basic matter of U.S. criminal procedural law that courts review convictions; clemency panels do not. With the rare exception of pardons based on actual innocence, the focus of capital clemency review is on the propriety of the sentence and not on the underlying conviction."

Furthermore, Mexico argues that the clemency process is in itself an ineffective remedy to satisfy the international obligations of the United States. It concludes: "clemency review is standardless, secretive, and immune from judicial oversight".

Finally, in support of its contention, Mexico argues that

"the failure of state clemency authorities to pay heed to the intervention of the US Department of State in cases of death-sentenced Mexican nationals refutes the [United States] contention that clemency review will provide meaningful consideration of the violations of rights conferred under Article 36".

136. Against this contention of Mexico, the United States claims that it "gives 'full effect' to the 'purposes for which the rights accorded under [Article 36, paragraph 1,] are intended' through executive clemency". It argues that "[t]he clemency process . . . is well suited to the task of providing review and reconsideration". The United States explains that "Clemency . . . is more than a matter of grace; it is part of the overall scheme for ensuring justice and fairness in the legal process" and that

"Clemency procedures are an integral part of the existing 'laws and regulations' of the United States through which errors are addressed".

137. Specifically in the context of the present case, the United States contends that the following two points are particularly noteworthy:

"First, these clemency procedures allow for broad participation by advocates of clemency, including an inmate's attorney and the sending state's consular officer . . . Second, these clemency officials are not bound by principles of procedural default, finality, prejudice standards, or any other limitations on judicial review. They may consider any facts and circumstances that they deem appropriate and relevant, including specifically Vienna Convention claims."

138. The Court would emphasize that the "review and reconsideration" prescribed by it in the *LaGrand* case should be effective. Thus it should "tak[e] account of the violation of the rights set forth in [the] Convention" (*I.C.J. Reports 2001*, p. 516, para. 128 (7)) and guarantee that the violation and the possible prejudice caused by that violation will be fully examined and taken into account in the review and reconsideration process. Lastly, review and reconsideration should be both of the sentence and of the conviction.

139. Accordingly, in a situation of the violation of rights under Article 36, paragraph 1, of the Vienna Convention, the defendant raises his claim in this respect not as a case of "harm to a particular right essential to a fair trial" — a concept relevant to the enjoyment of due process rights under the United States Constitution — but as a case involving the infringement of his rights under Article 36, paragraph 1. The rights guaranteed under the Vienna Convention are treaty rights which the United States has undertaken to comply with in relation to the individual concerned, irrespective of the due process rights under United States constitutional law. In this regard, the Court would point out that what is crucial in the review and reconsideration process is the existence of a procedure which guarantees that full weight is given to the violation of the rights set forth in the Vienna Convention, whatever may be the actual outcome of such review and reconsideration.

140. As has been explained in paragraphs 128 to 134 above, the Court is of the view that, in cases where the breach of the individual rights of Mexican nationals under Article 36, paragraph 1 (*b*), of the Convention has resulted, in the sequence of judicial proceedings that has followed, in the individuals concerned being subjected to prolonged detention or convicted and sentenced to severe penalties, the legal consequences of this breach have to be examined and taken into account in the course of

review and reconsideration. The Court considers that it is the judicial process that is suited to this task.

141. The Court in the *LaGrand* case left to the United States the choice of means as to how review and reconsideration should be achieved, especially in the light of the procedural default rule. Nevertheless, the premise on which the Court proceeded in that case was that the process of review and reconsideration should occur within the overall judicial proceedings relating to the individual defendant concerned.

142. As regards the clemency procedure, the Court notes that this performs an important function in the administration of criminal justice in the United States and is "the historic remedy for preventing miscarriages of justice where judicial process has been exhausted" (*Herrera v. Collins*, 506 US 390 (1993) at pp. 411-412). The Court accepts that executive clemency, while not judicial, is an integral part of the overall scheme for ensuring justice and fairness in the legal process within the United States criminal justice system. It must, however, point out that what is at issue in the present case is not whether executive clemency as an institution is or is not an integral part of the "existing laws and regulations of the United States", but whether the clemency process as practised within the criminal justice systems of different states in the United States can, in and of itself, qualify as an appropriate means for undertaking the effective "review and reconsideration of the conviction and sentence by taking account of the violation of the rights set forth in the Convention", as the Court prescribed in the *LaGrand* Judgment (*I.C.J. Reports 2001*, p. 514, para. 125).

143. It may be true, as the United States argues, that in a number of cases "clemency in fact results in pardons of convictions as well as commutations of sentences". In that sense and to that extent, it might be argued that the facts demonstrated by the United States testify to a degree of effectiveness of the clemency procedures as a means of relieving defendants on death row from execution. The Court notes, however, that the clemency process, as currently practised within the United States criminal justice system, does not appear to meet the requirements described in paragraph 138 above and that it is therefore not sufficient in itself to serve as an appropriate means of "review and reconsideration" as envisaged by the Court in the *LaGrand* case. The Court considers nevertheless that appropriate clemency procedures can supplement judicial review and reconsideration, in particular where the judicial system has failed to take due account of the violation of the rights set forth in the Vienna Convention, as has occurred in the case of the three Mexican nationals referred to in paragraph 114 above.

*

144. Finally, the Court will consider the eighth submission of Mexico, in which it asks the Court to adjudge and declare:

“That the [United States] shall cease its violations of Article 36 of the Vienna Convention with regard to Mexico and its 52 nationals and shall provide appropriate guarantees and assurances that it shall take measures sufficient to achieve increased compliance with Article 36 (1) and to ensure compliance with Article 36 (2).”

145. In this respect, Mexico recognizes the efforts by the United States to raise awareness of consular assistance rights, through the distribution of pamphlets and pocket cards and by the conduct of training programmes, and that the measures adopted by the United States to that end were noted by the Court in its decision in the *LaGrand* case (*I.C.J. Reports 2001*, pp. 511-513, paras. 121, 123-124). Mexico, however, notes with regret that

“the United States programme, whatever its components, has proven ineffective to prevent the regular and continuing violation by its competent authorities of consular notification and assistance rights guaranteed by Article 36”.

146. In particular, Mexico claims in relation to the violation of the obligations under Article 36, paragraph 1, of the Vienna Convention:

“*First*, competent authorities of the United States regularly fail to provide the timely notification required by Article 36 (1) (b) and thereby to [*sic*] frustrate the communication and access contemplated by Article 36 (1) (a) and the assistance contemplated by Article 36 (1) (c). These violations continue notwithstanding the Court’s judgment in *LaGrand* and the programme described there.

.....
Mexico has demonstrated, moreover, that the pattern of regular non-compliance continues. During the first half of 2003, Mexico has identified at least one hundred cases in which Mexican nationals have been arrested by competent authorities of the United States for serious felonies but not timely notified of their consular notification rights.”

Furthermore, in relation to the violation of the obligations under Article 36, paragraph 2, of the Vienna Convention, Mexico claims:

“*Second*, courts in the United States continue to apply doctrines of procedural default and non-retroactivity that prevent those courts from reaching the merits of Vienna Convention claims, and those courts that have addressed the merits of those claims (because no procedural bar applies) have repeatedly held that no remedy is avail-

able for a breach of the obligations of Article 36 . . . Likewise, the United States' reliance on clemency proceedings to meet *LaGrand's* requirement of review and reconsideration represents a deliberate decision to allow these legal rules and doctrines to continue to have their inevitable effect. Hence, the United States continues to breach Article 36 (2) by failing to give full effect to the purposes for which the rights accorded under Article 36 are intended."

147. The United States contradicts this contention of Mexico by claiming that "its efforts to improve the conveyance of information about consular notification are continuing unabated and are achieving tangible results". It contends that Mexico "fails to establish a 'regular and continuing' pattern of breaches of Article 36 in the wake of *LaGrand*".

148. Mexico emphasizes the necessity of requiring the cessation of the wrongful acts because, it alleges, the violation of Article 36 with regard to Mexico and its 52 nationals still continues. The Court considers, however, that Mexico has not established a continuing violation of Article 36 of the Vienna Convention with respect to the 52 individuals referred to in its final submissions; it cannot therefore uphold Mexico's claim seeking cessation. The Court would moreover point out that, inasmuch as these 52 individual cases are at various stages of criminal proceedings before the United States courts, they are in the state of *pendente lite*; and the Court has already indicated in respect of them what it regards as the appropriate remedy, namely review and reconsideration by reference to the breach of the Vienna Convention.

149. The Mexican request for guarantees of non-repetition is based on its contention that beyond these 52 cases there is a "regular and continuing" pattern of breaches by the United States of Article 36. In this respect, the Court observes that there is no evidence properly before it that would establish a general pattern. While it is a matter of concern that, even in the wake of the *LaGrand* Judgment, there remain a substantial number of cases of failure to carry out the obligation to furnish consular information to Mexican nationals, the Court notes that the United States has been making considerable efforts to ensure that its law enforcement authorities provide consular information to every arrested person they know or have reason to believe is a foreign national. Especially at the stage of pre-trial consular information, it is noteworthy that the United States has been making good faith efforts to implement the obligations incumbent upon it under Article 36, paragraph 1, of the Vienna Convention, through such measures as a new outreach programme launched in 1998, including the dissemination to federal, state and local authorities of the State Department booklet mentioned above in para-

graph 63. The Court wishes to recall in this context what it has said in paragraph 64 about efforts in some jurisdictions to provide the information under Article 36, paragraph 1 (b), in parallel with the reading of the "Miranda rights".

150. The Court would further note in this regard that in the *LaGrand* case Germany sought, *inter alia*, "a straightforward assurance that the United States will not repeat its unlawful acts" (*I.C.J. Reports 2001*, p. 511, para. 120). With regard to this general demand for an assurance of non-repetition, the Court stated:

"If a State, in proceedings before this Court, repeatedly refers to substantial activities which it is carrying out in order to achieve compliance with certain obligations under a treaty, then this expresses a commitment to follow through with the efforts in this regard. The programme in question certainly cannot provide an assurance that there will never again be a failure by the United States to observe the obligations of notification under Article 36 of the Vienna Convention. But no State could give such a guarantee and Germany does not seek it. The Court considers that the commitment expressed by the United States to ensure implementation of the specific measures adopted in performance of its obligations under Article 36, paragraph 1 (b), must be regarded as meeting Germany's request for a general assurance of non-repetition." (*I.C.J. Reports 2001*, pp. 512-513, para. 124.)

The Court believes that as far as the request of Mexico for guarantees and assurances of non-repetition is concerned, what the Court stated in this passage of the *LaGrand* Judgment remains applicable, and therefore meets that request.

* * *

151. The Court would now re-emphasize a point of importance. In the present case, it has had occasion to examine the obligations of the United States under Article 36 of the Vienna Convention in relation to Mexican nationals sentenced to death in the United States. Its findings as to the duty of review and reconsideration of convictions and sentences have been directed to the circumstance of severe penalties being imposed on foreign nationals who happen to be of Mexican nationality. To avoid any ambiguity, it should be made clear that, while what the Court has stated concerns the Mexican nationals whose cases have been brought before it by Mexico, the Court has been addressing the issues of principle raised in

the course of the present proceedings from the viewpoint of the general application of the Vienna Convention, and there can be no question of making an *a contrario* argument in respect of any of the Court's findings in the present Judgment. In other words, the fact that in this case the Court's ruling has concerned only Mexican nationals cannot be taken to imply that the conclusions reached by it in the present Judgment do not apply to other foreign nationals finding themselves in similar situations in the United States.

* *

152. By its Order of 5 February 2003 the Court, acting on a request by Mexico, indicated by way of provisional measure that

“The United States of America shall take all measures necessary to ensure that Mr. César Roberto Fierro Reyna, Mr. Roberto Moreno Ramos and Mr. Osvaldo Torres Aguilera are not executed pending final judgment in these proceedings” (*I.C.J. Reports 2003*, pp. 91-92, para. 59 (I)) (see paragraph 21 above).

The Order of 5 February 2003, according to its terms and to Article 41 of the Statute, was effective pending final judgment, and the obligations of the United States in that respect are, with effect from the date of the present Judgment, replaced by those declared in this Judgment. The Court has rejected Mexico's submission that, by way of *restitutio in integrum*, the United States is obliged to annul the convictions and sentences of all of the Mexican nationals the subject of its claims (see above, paragraphs 115-125). The Court has found that, in relation to these three persons (among others), the United States has committed breaches of its obligations under Article 36, paragraph 1 (*b*), of the Vienna Convention and Article 36, paragraphs 1 (*a*) and (*c*), of that Convention; moreover, in respect of those three persons alone, the United States has also committed breaches of Article 36, paragraph 2, of the said Convention. The review and reconsideration of conviction and sentence required by Article 36, paragraph 2, which is the appropriate remedy for breaches of Article 36, paragraph 1, has not been carried out. The Court considers that in these three cases it is for the United States to find an appropriate remedy having the nature of review and reconsideration according to the criteria indicated in paragraphs 138 *et seq.* of the present Judgment.

* * *

153. For these reasons,

THE COURT,

(1) By thirteen votes to two,

Rejects the objection by the United Mexican States to the admissibility of the objections presented by the United States of America to the jurisdiction of the Court and the admissibility of the Mexican claims;

IN FAVOUR: *President Shi; Vice-President Ranjeva; Judges Guillaume, Koroma, Vereshchetin, Higgins, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, Owada, Tomka;*

AGAINST: *Judge Parra-Aranguren; Judge ad hoc Sepúlveda;*

(2) Unanimously,

Rejects the four objections by the United States of America to the jurisdiction of the Court;

(3) Unanimously,

Rejects the five objections by the United States of America to the admissibility of the claims of the United Mexican States;

(4) By fourteen votes to one,

Finds that, by not informing, without delay upon their detention, the 51 Mexican nationals referred to in paragraph 106 (1) above of their rights under Article 36, paragraph 1 (b), of the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963, the United States of America breached the obligations incumbent upon it under that subparagraph;

IN FAVOUR: *President Shi; Vice-President Ranjeva; Judges Guillaume, Koroma, Vereshchetin, Higgins, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, Owada, Tomka; Judge ad hoc Sepúlveda;*

AGAINST: *Judge Parra-Aranguren;*

(5) By fourteen votes to one,

Finds that, by not notifying the appropriate Mexican consular post without delay of the detention of the 49 Mexican nationals referred to in paragraph 106 (2) above and thereby depriving the United Mexican States of the right, in a timely fashion, to render the assistance provided for by the Vienna Convention to the individuals concerned, the United States of America breached the obligations incumbent upon it under Article 36, paragraph 1 (b);

IN FAVOUR: *President Shi; Vice-President Ranjeva; Judges Guillaume, Koroma, Vereshchetin, Higgins, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, Owada, Tomka; Judge ad hoc Sepúlveda;*

AGAINST: *Judge Parra-Aranguren;*

(6) By fourteen votes to one,

Finds that, in relation to the 49 Mexican nationals referred to in paragraph 106 (3) above, the United States of America deprived the United Mexican States of the right, in a timely fashion, to communicate with and have access to those nationals and to visit them in detention, and thereby

breached the obligations incumbent upon it under Article 36, paragraph 1 (a) and (c), of the Convention;

IN FAVOUR: *President Shi; Vice-President Ranjeva; Judges Guillaume, Koroma, Vereshchetin, Higgins, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, Owada, Tomka; Judge ad hoc Sepúlveda;*

AGAINST: *Judge Parra-Aranguren;*

(7) By fourteen votes to one,

Finds that, in relation to the 34 Mexican nationals referred to in paragraph 106 (4) above, the United States of America deprived the United Mexican States of the right, in a timely fashion, to arrange for legal representation of those nationals, and thereby breached the obligations incumbent upon it under Article 36, paragraph 1 (c), of the Convention;

IN FAVOUR: *President Shi; Vice-President Ranjeva; Judges Guillaume, Koroma, Vereshchetin, Higgins, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, Owada, Tomka; Judge ad hoc Sepúlveda;*

AGAINST: *Judge Parra-Aranguren;*

(8) By fourteen votes to one,

Finds that, by not permitting the review and reconsideration, in the light of the rights set forth in the Convention, of the conviction and sentences of Mr. César Roberto Fierro Reyna, Mr. Roberto Moreno Ramos and Mr. Osvaldo Torres Aguilera, after the violations referred to in subparagraph (4) above had been established in respect of those individuals, the United States of America breached the obligations incumbent upon it under Article 36, paragraph 2, of the Convention;

IN FAVOUR: *President Shi; Vice-President Ranjeva; Judges Guillaume, Koroma, Vereshchetin, Higgins, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, Owada, Tomka; Judge ad hoc Sepúlveda;*

AGAINST: *Judge Parra-Aranguren;*

(9) By fourteen votes to one,

Finds that the appropriate reparation in this case consists in the obligation of the United States of America to provide, by means of its own choosing, review and reconsideration of the convictions and sentences of the Mexican nationals referred to in subparagraphs (4), (5), (6) and (7) above, by taking account both of the violation of the rights set forth in Article 36 of the Convention and of paragraphs 138 to 141 of this Judgment;

IN FAVOUR: *President Shi; Vice-President Ranjeva; Judges Guillaume, Koroma, Vereshchetin, Higgins, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, Owada, Tomka; Judge ad hoc Sepúlveda;*

AGAINST: *Judge Parra-Aranguren;*

(10) Unanimously,

Takes note of the commitment undertaken by the United States of America to ensure implementation of the specific measures adopted in performance of its obligations under Article 36, paragraph 1 (*b*), of the Vienna Convention; and *finds* that this commitment must be regarded as meeting the request by the United Mexican States for guarantees and assurances of non-repetition;

(11) Unanimously,

Finds that, should Mexican nationals nonetheless be sentenced to severe penalties, without their rights under Article 36, paragraph 1 (*b*), of the Convention having been respected, the United States of America shall provide, by means of its own choosing, review and reconsideration of the conviction and sentence, so as to allow full weight to be given to the violation of the rights set forth in the Convention, taking account of paragraphs 138 to 141 of this Judgment.

Done in English and in French, the English text being authoritative, at the Peace Palace, The Hague, this thirty-first day of March, two thousand and four, in three copies, one of which will be placed in the archives of the Court and the others transmitted to the Government of the United Mexican States and the Government of the United States of America, respectively.

(Signed) SHI Jiuyong,
President.

(Signed) Philippe COUVREUR,
Registrar.

President SHI and Vice-President RANIEVA append declarations to the Judgment of the Court; Judges VERESHCHETIN, PARRA-ARANGUREN and TOMKA and Judge *ad hoc* SEPÚLVEDA append separate opinions to the Judgment of the Court.

(Initialled) J.Y.S.

(Initialled) Ph.C.